

Cuenta Pública 2026

— Participativa —

Ministerio del Medio Ambiente



Ministerio del
Medio
Ambiente

Gobierno de Chile

CUENTA PÚBLICA 2026

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS MINISTERIALES

1. Misión

El Ministerio del Medio Ambiente tiene por misión velar por el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, asegurando la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental del país. Para ello, impulsa el diseño, implementación y coordinación de políticas públicas, normas e instrumentos de gestión ambiental que promuevan un desarrollo sustentable, con un marco regulatorio robusto, eficiente y basado en la evidencia, orientado al bienestar de las personas, las comunidades y las futuras generaciones.

Los ámbitos de acción del Ministerio del Medio Ambiente se centran en la promoción y resguardo de la calidad ambiental; la conservación de la biodiversidad y la gestión de áreas protegidas; el desarrollo e implementación de políticas de cambio climático; la evaluación ambiental de proyectos de inversión; el impulso de la economía circular y la gestión sustentable de residuos; y el fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información para la ciudadanía.

2. Objetivos Estratégicos

El Ministerio del Medio Ambiente, en cumplimiento de su misión, determina sus planes de acción teniendo presente los siguientes objetivos estratégicos, buscando cumplir en forma eficiente y eficaz con cada uno de ellos:

- a) Reducir los niveles de latencia y saturación en los componentes de aire y agua, mejorando la calidad de vida de las personas.
- b) Conservar la biodiversidad en los ecosistemas terrestres y marinos de Chile, protegiendo los servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar de la población y las comunidades del país.
- c) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero avanzando en el cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y la Ley Marco de Cambio Climático.
- d) Agilizar la evaluación ambiental de proyectos de inversión mejorando procedimientos, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos y entregando certeza a todos los actores.
- e) Reducir la generación de residuos domiciliarios, organizaciones, instituciones, empresas y sectores productivos, aumentando las alternativas de reutilización, acuerdos de producción limpia, reciclaje y valorización, fomentando la transición hacia prácticas de economía circular.
- f) Aumentar la satisfacción de la experiencia usuaria en el acceso y uso de información ambiental, contribuyendo a fortalecer la conciencia y conductas de protección del medio ambiente en la ciudadanía.

3. Ejecución presupuestaria

La **partida 25: Ministerio Del Medio Ambiente**, alcanzó un **95%** de ejecución presupuestaria (M\$91.274.838), respecto al presupuesto vigente a diciembre 2025 (M\$95.702.420). El 64% del presupuesto de la institución, corresponde a gasto en personal, seguido por un 19% de gasto asociado a los diferentes programas que componen la cartera (M\$17.008.001), línea que obtuvo un **92%** de ejecución efectiva (M\$17.008.001).

Subt.	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Ejecución Acumulada M\$	Porcentaje de Ejecución
21	Gastos en personal	60.964.398	59.430.261	58.233.247	98%
22	Bienes y servicios de consumo	13.033.081	10.924.426	10.527.943	96%
23	Prestaciones de seguridad social	60	248.136	207.394	84%
24	Transferencias corrientes	18.178.053	18.481.120	17.008.001	92%
25	Integros al fisco	120	1.354.651	214.347	16%
26	Otros gastos corrientes		3.000	3.000	100%
29	Adquisición de activos no financieros	2.451.499	2.502.895	2.324.166	93%
34	Servicio de la deuda	60	2.757.931	2.756.740	100%
	GASTOS	94.627.271	95.702.420	91.274.838	95%

Se destaca la ejecución presupuestaria vinculada a los procesos de evaluación y fiscalización ambiental, alcanzando un **99%** y un **97%** respectivamente. Por otro lado, las menores ejecuciones corresponden al Servicio de Biodiversidad y áreas Protegidas (SBAP) con un (86%), debido a los retrasos propios de su incipiente instalación y la subsecretaría del Medio Ambiente (94%), principalmente debido a complejidades de ejecución en los procesos de consulta indígena de los reglamentos de áreas protegidas y sitios prioritarios de la Ley N°21.600.

Capítulo	Servicio	Presupuesto Inicial M\$	Presupuesto Vigente M\$	Ejecución Acumulada M\$	Porcentaje de Ejecución
01	Subsecretaría del Medio Ambiente	43.805.229	47.785.227	45.099.278	94%
02	Servicio de Evaluación Ambiental	21.541.184	22.401.658	22.214.263	99%
03	Superintendencia del Medio Ambiente	17.033.642	19.138.565	18.483.658	97%
04	Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas	12.247.216	6.376.970	5.477.639	86%
	GASTOS	94.627.271	95.702.420	91.274.838	95%

II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL 2025.

1. Institucionalidad y normativa ambiental

El hito institucional más relevante fue la entrada en operación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas el 1 de febrero de 2026, resultado de un proceso de implementación desarrollado a lo largo del año 2025.

Este servicio, creado por la Ley N°21.600, completa la institucionalidad ambiental diseñada en la reforma de 2010, que estableció el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Lo anterior implica la consolidación de la institucionalidad ambiental en nuestro país, contando ahora con la totalidad de los servicios referidos a la evaluación ambiental, la fiscalización ambiental y la gestión y administración de las áreas protegidas en el país.

Para preparar la operación del nuevo servicio, se constituyó una mesa nacional de gestión del cambio, con participación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la Corporación Nacional Forestal, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Civil. Esta instancia tuvo por objetivo resguardar la continuidad operativa y administrativa durante el proceso de traspaso desde la Corporación Nacional Forestal, que involucra a más de 400 funcionarios, bienes y áreas protegidas.

Además, se suscribió un convenio de colaboración con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para el traspaso de la gestión de áreas marinas protegidas y la coordinación en materias de fiscalización. En enero de 2026, se firmó un convenio con el Consejo de Monumentos Nacionales para el traspaso de competencias y la homologación de santuarios de la naturaleza a las categorías del nuevo sistema. Asimismo, se formalizó la coordinación con la Superintendencia del Medio Ambiente para articular la fiscalización ambiental en áreas protegidas.

En materia normativa, durante 2025 el Ministerio del Medio Ambiente ejecutó una agenda regulatoria de alcance transversal en los ámbitos de biodiversidad, calidad del aire, cambio climático y economía circular. Se aprobaron reglamentos, normas de calidad y emisión, planes de descontaminación, instrumentos de adaptación y mitigación climática y regulaciones sobre responsabilidad extendida del productor. El conjunto de estos instrumentos consolida el marco normativo ambiental del país y avanza en el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales.

La agenda regulatoria señalada consistió en la elaboración de los siguientes instrumentos normativos:

Materia	Normativa
Cambio Climático	Contribución Determinada Nivel Nacional.
Calidad del Aire	Plan de Descontaminación Atmosférica para la Macrozona del Valle Central de la Región del Maule.
Calidad del Aire	Norma de Emisión para grupos electrógenos.
Calidad del Aire	Norma de emisión de ruidos para buses de locomoción colectiva urbana y rural.
Calidad del Aire	Norma primaria de calidad del aire para monóxido de carbono (CO), elaborado a partir de la revisión del decreto supremo N°115, de 2002, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Economía Circular	Estrategia de economía circular para textiles al 2040.

Desde del 11 de marzo de 2026, se ha adoptado una activa agenda legislativa, y para ello, se ha concurrido en reiteradas oportunidades a las instancias de tramitación del proyecto de ley que modifica la ley sobre entrega de bolsas plásticas de comercio; del proyecto de ley que modifica la ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para impedir el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento asociado; del proyecto de ley que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente; y del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social.

Respecto este último proyecto de ley, actualmente en segundo trámite constitucional, se ha participado activamente en el análisis de sus disposiciones ambientales, regulatorias e institucionales, particularmente las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, adecuaciones a Ley N° 21.600 y a la de Monumentos Nacionales, y en el incentivo de nuevas figuras de agilización institucional, sin disminuir estándares ambientales, comprometiendo así un desarrollo sostenible y estableciendo reglas claras para todos los actores.

En este marco, se han efectuado positivos avances en las Comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, aportando antecedentes técnicos para la discusión y votación de más de 207 indicaciones recaídas en el capítulo ambiental, avanzando en su tramitación legislativa. Asimismo, se avanzó en el trabajo interministerial asociado al análisis y revisión de dichas indicaciones presentadas durante la tramitación del proyecto, participando en instancias de coordinación técnica destinadas a perfeccionar aspectos regulatorios y fortalecer la coherencia normativa de la iniciativa.

Sumado a lo anterior, se ha avanzado en una agenda legislativa orientada a profundizar los cambios a la institucionalidad ambiental, en todos sus frentes. En este contexto, se ha tomado un rol activo en la tramitación del proyecto de ley que fortalece la institucionalidad ambiental y mejora su eficiencia por medio de la reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Servicio de Evaluación Ambiental, con el Ministerio del Medio Ambiente manteniendo un rol principal en su discusión legislativa. A ello se suma la tramitación del proyecto de ley que fortalece la fiscalización y el cumplimiento ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente, también en segundo trámite constitucional, que busca perfeccionar el régimen sancionatorio ambiental, permitiendo una más adecuada fiscalización de los instrumentos de gestión ambiental. Por último, podemos adelantar que el Ministerio se encuentra desarrollando los cimientos de lo que será una reforma sustantiva a

la jurisdicción ambiental, siendo así la primera la reforma a los Tribunales Ambientales en su historia. Este conjunto de iniciativas permitirá consolidar una institucionalidad ambiental moderna y adaptada

a los tiempos, que no solo otorgue certeza y garantías a todos los actores, sino que sea además eficiente y ágil.

En materia internacional, el Ministerio del Medio Ambiente ha sostenido reuniones de alto nivel con representantes de países como Reino Unido, Australia, Francia y Canadá, así como con organismos multilaterales e instituciones internacionales, entre ellos la ONU, el PNUD, Pacto Global de Naciones Unidas, WWF y The Nature Conservancy. Estas gestiones reflejan la relevancia de la agenda internacional impulsada por la actual administración y han contribuido a fortalecer la presencia del Ministerio en espacios diplomáticos y de cooperación con la sociedad civil.

2. Cambio climático

La División de Cambio Climático de la Subsecretaría del Medio Ambiente lideró la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 2025, en cumplimiento del mandato de la Ley Marco de Cambio Climático y del Acuerdo de París. Esta constituye la estrategia nacional para efectos de cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático, y contiene una serie de acciones y medidas orientadas a asegurar dicho cumplimiento.

El proceso, iniciado en julio de 2024, incluyó 16 talleres regionales, cuatro talleres sectoriales y encuentros interministeriales. Durante este proceso, se recibieron 757 observaciones de 79 actores. El texto definitivo fue aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático y publicado mediante Decreto N°28 de 20 de septiembre de 2025.

En el ámbito del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó la Guía Metodológica para la Estimación y Reporte de Gases de Efecto Invernadero y Forzantes Climáticos de Vida Corta. Esta guía establece una metodología general para cuantificar y reportar las emisiones atmosféricas de proyectos sometidos a evaluación, en el marco del Decreto Supremo N°30 de 2023, que incorporó la variable de cambio climático en el proceso de evaluación ambiental.

3. Educación ambiental y participación ciudadana

Durante 2025 se dio continuidad al trabajo en las zonas prioritarias de Huasco, Quintero-Puchuncaví-Concón, Coronel, Calama, Mejillones y Tocopilla. Estas instancias articularon la participación de la sociedad civil, el sector productivo y el sector público en torno a agendas de recuperación ambiental y reconversión, consolidando gobernanzas locales como mecanismos permanentes de diálogo y seguimiento.

En paralelo, se continuó fortaleciendo la coordinación interinstitucional asociada a la implementación de medidas en las distintas áreas en transición, avanzando en mecanismos de seguimiento, articulación sectorial y monitoreo de compromisos. En este sentido, se continuó con la puesta en marcha de una plataforma web para realizar un seguimiento del cumplimiento y estado de avance de las medidas comprometidas en estos territorios. Este trabajo ha permitido mejorar la gestión de iniciativas vinculadas a recuperación ambiental y social, reconversión productiva, calidad de vida y

desarrollo territorial, considerando las particularidades de cada territorio y las competencias de los distintos organismos involucrados.

Asimismo, se ha mantenido una coordinación permanente con ministerios, servicios públicos y gobiernos regionales y locales para impulsar el cumplimiento de las medidas comprometidas en la Estrategia Nacional de Transición Socioecológica Justa. Lo anterior incluye acciones vinculadas a planificación territorial, empleo y reconversión laboral, monitoreo ambiental, salud ambiental, biodiversidad y fortalecimiento de capacidades locales, entre otras materias.

Durante este período también se ha avanzado en la consolidación de espacios de trabajo técnico entre instituciones públicas, favoreciendo una mayor trazabilidad de las medidas comprometidas y una mejor articulación entre políticas sectoriales y objetivos ambientales. Este enfoque busca fortalecer la implementación gradual de acciones de transición, promoviendo procesos coordinados, con participación territorial y orientados a otorgar mayor estabilidad y continuidad a las medidas impulsadas en estas zonas.

Adicionalmente, se continuó apoyando el funcionamiento de las gobernanzas territoriales de los Consejos para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS) y los mecanismos de participación asociados a las zonas en transición, resguardando la incorporación de actores locales en los procesos de seguimiento y priorización de iniciativas. Estas instancias han permitido mantener canales de diálogo permanentes y contribuir a una implementación más coordinada y transparente de las acciones comprometidas por el Estado en los distintos territorios.

Durante 2025 se realizaron 240 actividades de educación ambiental a lo largo del país, beneficiando a cerca de 30.500 personas, entre funcionarios, docentes y ciudadanía. En el marco del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, se certificaron 1.022 establecimientos. Este sistema consiste en una instancia voluntaria que permite a los establecimientos educacionales obtener una certificación ambiental en caso de cumplir con la implementación de estrategias de educación ambiental al interior de sus comunidades escolares.

La Academia de Formación Ambiental Adriana Hoffmann ejecutó 19 cursos en materias de calidad del aire, agua, cambio climático, Acuerdo de Escazú, derechos humanos y humedales, capacitando a 2.945 personas. Asimismo, se implementó la primera versión de un curso internacional para fortalecer capacidades en educación ambiental comunitaria, en alianza con organismos de cooperación y redes internacionales.

El Fondo de Protección Ambiental, en su vigésimo octava versión, lanzó nueve concursos orientados a impulsar soluciones locales con impacto ambiental y social, poniendo a disposición financiamiento para 141 proyectos por un total de 1.287 millones de pesos. Las convocatorias incluyeron líneas de conservación de fauna silvestre, concursos en zonas prioritarias como Tocopilla y Mejillones, puesta en valor de ecosistemas altoandinos, biodiversidad, humedales y criosfera, además de iniciativas de pueblos originarios, iniciativas ciudadanas y establecimientos educacionales.

En el ámbito de la gestión ambiental local, 222 municipalidades participaron en programas de gestión ambiental en distintos niveles de certificación, 30 de ellas en el Piloto de Municipios Sustentables. El programa de mejoramiento de gestión Estado Verde, por su parte, alcanzó a 175 servicios públicos, mientras que 81 instituciones y empresas que participaron en el programa Oficina Verde.

4. Biodiversidad e implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas inició su etapa de implementación durante 2025 y entró en operación en febrero de 2026.

El Servicio diseñó el Sistema de Información de la Biodiversidad, disponible en el Geoportal del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Además, se ejecutó la primera etapa del Inventario de Humedales, aplicando la metodología en dos cuencas piloto con características hidrogeológicas y bioclimáticas contrastantes.

Como Ministerio hemos avanzado en diversas líneas de trabajo. Recientemente se dio inicio al proceso de actualización de la Guía de Delimitación y Caracterización de Humedales Urbanos, actualmente en etapa de información pública para la presentación de antecedentes, con el objeto de fortalecer el estándar técnico y jurídico de los procesos de reconocimiento de estos ecosistemas. Asimismo, aprobamos el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) de la Ranita de Darwin, que publicamos en el Diario Oficial a comienzos de abril del presente año.

Por otra parte, actualmente se encuentran en ajuste los decretos relativos a la creación de las áreas protegidas Mar de Juan Fernández y Nazca-Desventuradas II, los que se espera reingresar a tramitación a la brevedad posible. Lo anterior se enmarca en la implementación de la Ley N° 21.600, considerando que el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas inició sus operaciones el 2 de febrero de 2026, junto con la oficialización del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, proceso cuya instalación el Ministerio ha continuado acompañando, además de mantener el trabajo permanente de declaratoria de humedales urbanos en el marco de la Ley N° 21.202.

5. Calidad del aire, ruido, contaminación lumínica, radiación electromagnética y olores

Durante el 2025 se fortaleció la red pública de monitoreo de calidad del aire. En Concón-Quintero-Puchuncaví se implementó una red con catorce nuevas estaciones, tres de ellas de tipo “supersitio”, que miden todos los contaminantes normados. En Calama se incorporaron cuatro nuevas estaciones, una de ellas tipo supersitio y dos con alimentación solar.

En materia regulatoria, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó el Plan de Descontaminación Atmosférica para la Macrozona del Valle Central de la Región del Maule. Asimismo, entraron en vigor los planes de descontaminación de Temuco, Padre Las Casas, las comunas de Llay – Llay, Catemu, Panquehue, y Quillota, y la norma primaria de calidad del aire para arsénico. Además, se dictaron medidas provisionales para las comunas de Copiapó y Tierra Amarilla.

Se publicaron anteproyectos y se realizaron consultas públicas del Plan de Descontaminación Atmosférica de Valdivia y de nuevas normas para monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre y la cuenca del río Huasco.

En materia de contaminación por olores, como Ministerio logramos publicar normas de emisión para plantas de harina y aceite de pescado y para plantas de celulosa kraft, cumpliendo así un desafío regulatorio que se encontraba pendiente.

A su vez, en materia de ruido, se aprobó la actualización de la norma de emisión para buses urbanos y rurales y se inició la revisión de la norma aplicable a vehículos livianos y motocicletas. Se realizó el primer seminario nacional de gestión de olores, instancia en la que se dieron a conocer a la ciudadanía los avances en gestión de olores que se han alcanzado en los últimos años tanto por el Ministerio del Medio Ambiente como también por otros organismos públicos, entre ellos la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) y la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Además, se elaboraron lineamientos para el control de ruido comunitario en copropiedades.

6. Economía circular y gestión de residuos

Durante 2025 se avanzó en el marco regulatorio de la Ley N°20.920, que establece la Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP). Esta norma constituye el principal instrumento normativo en virtud del cual los productores de productos prioritarios (definidos legalmente) son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos en el país. A partir del diagnóstico de dicha ley, se elaboró el anteproyecto para baterías y se incorporaron los textiles como nuevo producto prioritario sujeto a la regulación.

En Chile se estima que los residuos textiles generan 572 mil toneladas al año, lo que representa cerca del 7% de los residuos sólidos urbanos per cápita. Estos residuos suelen terminar en rellenos sanitarios, vertederos o microbasurales, generando impactos ambientales como la emisión de micro plásticos y la contaminación de suelos y aguas. Si bien su tasa de valorización es aún baja, los residuos textiles tienen un alto potencial de valorización, a través de la reutilización, el reciclaje o su uso como insumo en otras industrias. En virtud de esta ley, más de 1.500 productores de productos prioritarios operan bajo sistemas de gestión.

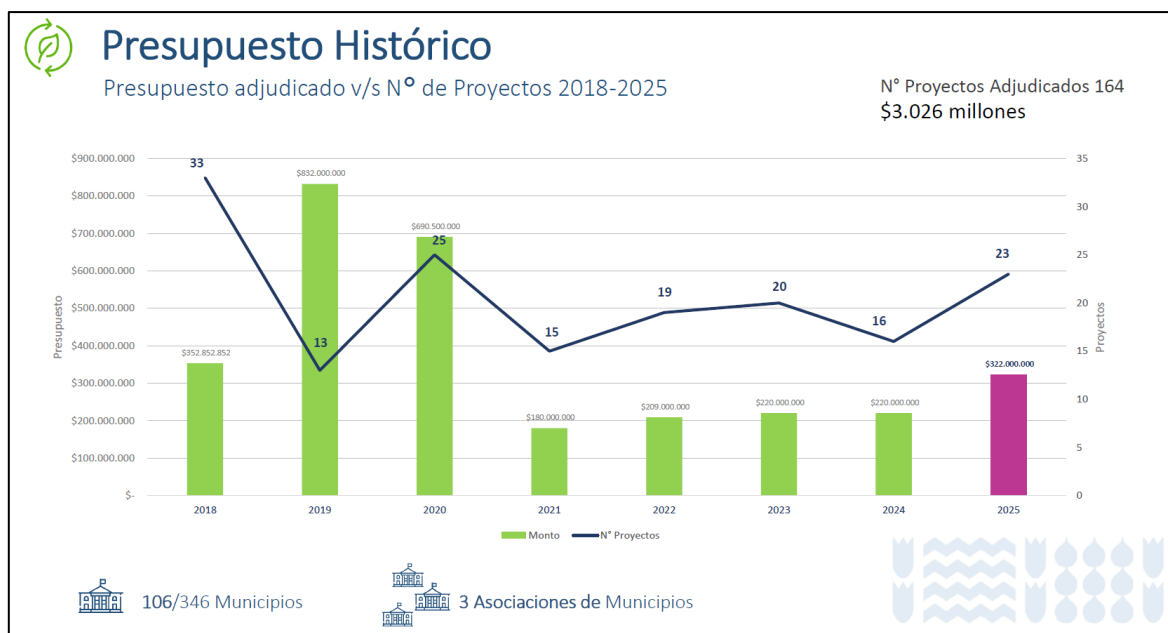
En este contexto, el 7 de mayo de 2026 se publicó en el Diario Oficial el decreto que establece metas de recolección y valorización de residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, avanzando en la implementación gradual de nuevos instrumentos de la Ley REP. Este decreto incorpora obligaciones para productores y sistemas de gestión, estableciendo metas progresivas orientadas a fortalecer la recolección y valorización de estos residuos, promoviendo la recuperación de materiales y reduciendo su disposición inadecuada. Asimismo, se avanzó en el fortalecimiento de la trazabilidad y en el desarrollo de capacidades e infraestructura para la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, contribuyendo a consolidar el modelo de economía circular impulsado por la normativa.

Asimismo, entre el 25 de febrero y el 30 de abril de 2026 se desarrolló el proceso de consulta ciudadana del anteproyecto de decreto supremo que establece metas de recolección, valorización y otras obligaciones asociadas a baterías. A través de este proceso, se recogieron observaciones y antecedentes técnicos de actores públicos, privados, municipios, sistemas de gestión y organizaciones de la sociedad civil, avanzando en la construcción de un instrumento regulatorio para la gestión de baterías fuera de uso.

Este anteproyecto considera obligaciones vinculadas a recolección, almacenamiento, valorización y trazabilidad, junto con mecanismos de implementación gradual y coordinación entre actores involucrados en la cadena de gestión de residuos. Con ello, se continúa avanzando en el desarrollo

de nuevas regulaciones destinadas a fortalecer la valorización de residuos y reducir sus impactos ambientales.

En el ámbito territorial, en el año 2025, el Fondo para el Reciclaje financió 23 proyectos, con una inversión de 322 millones de pesos. Lo anterior implicó un crecimiento en el presupuesto adjudicado y en el número de proyectos respecto de los años anteriores:



Durante el período, se fortaleció la agenda de economía circular y gestión sustentable de residuos con el lanzamiento de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales y la publicación de guías para apoyar la planificación regional y comunal. En la misma línea, se publicó la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040, elaborada participativamente junto con diversos actores, y se impulsó la Hoja de Ruta para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Asimismo, se registraron avances en la Estrategia para Reducir las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos al 2040, incluyendo el primer Acuerdo de Producción Limpia en esta materia.

7. Economía Ambiental

En 2025 se avanzó en la construcción de instrumentos económicos orientados a la valorización de los activos naturales y al financiamiento de la gestión ambiental.

En el ámbito de los mercados de carbono, el Ministerio del Medio Ambiente elaboró la Hoja de Ruta de Instrumentos de Precio y Mercados de Carbono 2025, que establece lineamientos para su implementación y para el desarrollo de otros mecanismos de precio de las emisiones, con el objetivo de potenciar esta nueva fuente de reducción de emisiones vía compensación.

El documento incorpora la aplicación del artículo 6 del Acuerdo de París, que promueve la transferencia internacional de reducciones de emisiones entre países, y consolida herramientas

existentes como el impuesto verde, las normas de emisión, los sistemas de compensación y el programa Huella Chile, junto con un futuro sistema de certificación voluntaria.

El instrumento prioriza iniciativas en biogás, almacenamiento energético y restauración de bosque nativo, proyectando reducciones promedio de cinco millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente anuales. Fue presentado en la Trigésima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, realizada en Belém, Brasil.

En materia de financiamiento de la conservación de la biodiversidad, el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda elaboraron un bono soberano de tipo *Sustainability-Linked Bond*. Se trata de un instrumento de deuda cuyas condiciones financieras están vinculadas al cumplimiento de metas de conservación, asociadas a la meta 3 del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece la protección del 30% de la superficie terrestre al año 2030.

El instrumento introduce incentivos financieros concretos, trazabilidad de compromisos y rendición de cuentas en materia de biodiversidad, que refuerzan de manera importante los compromisos del Estado. Asimismo, contempla beneficios económicos para los Estados que cumplan con las obligaciones acordadas y sanciones para aquellos que no alcancen estas metas, reforzando mediante este incentivo económico el cumplimiento de los compromisos de conservación acordados.

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas elaboró, en su etapa de implementación, las Bases Generales del Fondo Nacional de Biodiversidad, instrumento contemplado en la Ley N°21.600 destinado a financiar proyectos de conservación, principalmente fuera de las áreas protegidas del Estado. Para su diseño se revisaron experiencias nacionales e internacionales de fondos ambientales y se analizaron metodologías vinculadas a sistemas de certificación de biodiversidad, con el fin de habilitar el financiamiento de iniciativas de conservación en el país.

8. Evaluación ambiental

En 2025 ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 475 proyectos -46 Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y 429 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)-, con una inversión declarada de 57.928 millones de dólares.

En el mismo período, se aprobaron 356 proyectos (39 EIA y 317 DIA), por un monto de 41.530 millones de dólares. Entre los proyectos estratégicos calificados en plazos inferiores al promedio se cuentan la Planta de Hidrógeno y Amoniaco Verde Volta (2.500 millones de dólares), modificaciones a Minera Escondida (2.351 millones de dólares), la Línea 9 del Metro de Santiago (1.946 millones de dólares), la línea de transmisión eléctrica HVDC Kimal-Lo Aguirre (1.480 millones de dólares) y la modernización de la Fundición HVL-Paipote (1.378 millones de dólares).

En materia de modernización tecnológica, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) implementó el Plan de Modernización del e-SEIA, orientado a reducir los tiempos de tramitación, fortalecer la

gestión de datos y facilitar el acceso a la información para funcionarios, ciudadanía, consultores y titulares de proyectos.

El Plan incorporó, por primera vez, inteligencia artificial en la plataforma mediante un buscador inteligente y una herramienta comparativa de proyectos, lo que permite una mayor cercanía con los

usuarios del sistema y una mejor disponibilidad de la información para la elaboración de proyectos, así como para las consultas de la ciudadanía sobre iniciativas en evaluación y proyectos ya resueltos por parte del servicio.

Forman parte de este plan las siguientes herramientas:

- Herramientas de Pertinencia Ágil. Uno de los procesos más relevantes en el SEA es la respuesta a las Consultas de Pertinencia de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, pues cada año ingresan cerca de 2.600 consultas, lo que genera una alta carga laboral. Esta herramienta permitirá reducir los tiempos asociados a la tramitación de Consultas de Pertinencias de proyectos nuevos -sin Resolución de Calificación Ambiental-, mediante la estandarización y tabulación de la información aportada por los titulares y la automatización de los procesos de revisión, análisis y respuesta de los procedimientos, aportando mayor agilidad a las consultas de pertinencia.

Lo anterior incluye nuevas funcionalidades que permitirán al sistema solicitar información más detallada a proponentes, optimizar cargas laborales, y disminuir los tiempos de análisis.

- PAS sin más trámite. Esta herramienta corresponde a la generación de certificados de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), los cuales ya fueron informados, mediante oficio, a todos los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA). Dichos certificados serán otorgados juntamente con la respectiva Resolución de Calificación Ambiental, con el objeto de acreditar que todos sus requisitos fueron evaluados y verificados en el marco del proceso de evaluación ambiental. Con esto, no se requerirá una duplicidad de antecedentes al titular, permitiendo que, con los mismos elementos ya solicitados, se pueda avanzar de manera paralela en el otorgamiento de los permisos sectoriales, evitando duplicidades. Con esto, se acelera su tramitación y reduciendo los tiempos para la puesta en marcha de las iniciativas de inversión.

La implementación se fundamenta en la Ley N°19.300, que establece que corresponderá al SEA *“uniformar los criterios, requisitos, condiciones, antecedentes, certificados, trámites, exigencias técnicas y procedimientos de carácter ambiental que establezcan los ministerios y demás organismos del Estado competentes, mediante el establecimiento, entre otros, de guías trámite”* (artículo 81, letra d).

En particular, los certificados distinguirán dos categorías:

- La primera corresponde a los Permisos Ambientales Sectoriales de contenido únicamente ambiental, que indican que la totalidad de las condiciones y exigencias para su otorgamiento fueron acreditadas y cumplidas en el marco del SEIA. Ante esto, los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA)

deberán otorgar de manera obligatoria el permiso sin mayor trámite, bajo las condiciones establecidas en la Resolución de Calificación Ambiental citada.

- La segunda categoría corresponde a los Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos, en cuyo caso se acreditará que el permiso fue tramitado y que cumple con los contenidos ambientales evaluados dentro de las exigencias del Sistema de Evaluación de Impacto.
- Con este certificado, los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) no podrán denegar el permiso ni imponer nuevas exigencias de carácter ambiental.
- Nuevo Sistema de Información Geográfica. Esta herramienta busca mejorar la disponibilidad de datos espaciales presente en los visores territoriales del Servicio de Evaluación Ambiental, con el fin de contextualizar de una manera más accesible la geoinformación que acompaña a los proyectos durante su proceso de evaluación de impacto ambiental, con el fin de facilitar el análisis tanto para titulares como evaluadores.

Al respecto, se mejoraron las herramientas que permiten la incorporación de la geoinformación de partes, obras, acciones, áreas de influencia, caracterizaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental y líneas de base de los Estudios de Impacto Ambiental, desde la presentación del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Asimismo, se mejoró el acceso a la información geoespacial que acompaña a los proyectos en evaluación ambiental, la estandarización de dicha información en el sistema y las herramientas para consultar y analizar datos espaciales, generando más y mejor calidad de información para todos los actores del sistema.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, y en cumplimiento de la instrucción presidencial, se adoptaron medidas orientadas a fortalecer la rendición de cuentas sobre el estado de tramitación y los tiempos efectivos de resolución de los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Actualmente, el sitio electrónico del Servicio de Evaluación Ambiental dispone de información detallada en el “Reporte de Progreso en Recursos de Reclamación en el SEIA”.

Esta medida de transparencia activa, en los términos de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, contribuye a mejorar el acceso ciudadano a la información, entregar mayor certeza a la ejecución de inversiones y promover el desarrollo sustentable y el bienestar de las personas.

En definitiva, esta Secretaría de Estado dará continuidad a la labor expuesta, promoviendo el cumplimiento oportuno y efectivo de reglas claras, con una orientación central: contribuir al desarrollo económico sustentable de Chile y al bienestar de las personas que habitan el país.

9. Fiscalización ambiental

Durante el año 2025 la Superintendencia ejecutó 5.356 actividades de fiscalización ambiental, manteniendo un despliegue operativo robusto a lo largo de todo el país. Estas acciones incluyeron

inspecciones en terreno, análisis de información, revisiones documentales y otras actuaciones técnicas asociadas al control de instrumentos de gestión ambiental. El volumen alcanzado consolida una tendencia de alta ejecución iniciada en años anteriores y da cuenta de una capacidad institucional estable para sostener tanto fiscalizaciones programadas como no programadas, resguardando el cumplimiento de la normativa ambiental.

Los resultados de esta labor, junto con las denuncias recibidas, se tradujeron en el inicio de 413 procedimientos sancionatorios a nivel nacional. El volumen alcanzado refleja una capacidad sostenida de análisis jurídico-técnico, formulación de cargos y tramitación inicial de expedientes, considerando la diversidad de instrumentos de carácter ambiental involucrados. La gestión incluyó la priorización de casos según criterios técnicos y la distribución de carga al interior del equipo de la División de Sanción y Cumplimiento de la SMA.

En paralelo, durante el mismo período se resolvieron 265 Programas de Cumplimiento (PdC), alcanzando el mayor volumen anual de pronunciamientos en esta materia. La tramitación de PdC implica la revisión técnica de las medidas propuestas por los titulares, el análisis de su idoneidad, verificabilidad y coherencia con las infracciones formuladas. Esta gestión permitió canalizar un número significativo de procedimientos hacia mecanismos de cumplimiento regulado, manteniendo un seguimiento continuo de las obligaciones comprometidas por parte de los fiscalizados por el servicio.

Asimismo, la gestión de denuncias alcanzó un nivel de madurez institucional sin precedentes. Se registraron 8.197 denuncias ingresadas, constituyendo el mayor volumen anual en la historia de la SMA, mientras que las denuncias terminadas llegaron a 5.395, lo que representa un incremento del 31% respecto del récord anterior alcanzado en 2024 y el mayor número anual de cierres desde la creación de la institución.

Este desempeño permitió que, por primera vez, las denuncias terminadas superaran de manera sostenida a las pendientes, cerrando el año con más del 53% del total histórico de denuncias resueltas. Ello evidencia una expansión significativa de la capacidad operativa institucional y consolida una trayectoria de mejora continua en la respuesta ciudadana.

III. ANÁLISIS SITUACIONAL

Al inicio del actual período de gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente enfrenta un conjunto de desafíos estructurales que requieren atención sostenida en materia de calidad ambiental, biodiversidad, cambio climático, economía circular e institucionalidad.

La gestión del período se orienta a eliminar ineficiencias institucionales acumuladas, fortalecer la certeza de los procesos regulatorios, consolidando y mejorando el estándar de los servicios que integran la institucionalidad ambiental del país, resguardando en todo momento la normativa ambiental vigente.

a. Institucionalidad y normativa ambiental

Con la entrada en operación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas el primero de febrero de 2026, la institucionalidad ambiental diseñada por la reforma del año 2010 queda formalmente completa.

El país cuenta ahora con cuatro organismos especializados: el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. No obstante, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se encuentra en una fase inicial de consolidación operativa, con varios de sus doce reglamentos

técnicos aún en tramitación y su despliegue regional en proceso. Entre sus principales desafíos se encuentra recibir el traspaso de funcionarios, bienes y la administración de las áreas protegidas actualmente a cargo de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

En el plano normativo, durante 2025 y los primeros meses de 2026 se aprobó un número significativo de instrumentos regulatorios. Con el propósito de asegurar coherencia y consistencia en la agenda regulatoria, la actual administración dispuso, al inicio de su período, el retiro y revisión de 43 decretos supremos que se encontraban en proceso de trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República. Estos se encuentran actualmente en proceso de un riguroso análisis por parte del equipo ministerial, en un proceso responsable de revisión de sus contenidos.

En materia de evaluación ambiental, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) enfrenta desafíos estructurales de eficiencia y certeza jurídica que han limitado su capacidad de respuesta oportuna.

En tal sentido, el proyecto de ley que moderniza el SEIA -SEA 2.0- se encuentra en tramitación en el Senado, mientras que el proyecto que fortalece la eficacia de la Superintendencia del Medio Ambiente aguarda su segundo trámite constitucional en la misma cámara. La resolución de ambas iniciativas es prioritaria para modernizar la institucionalidad ambiental y dar señales claras al mercado. Para ello, se están implementando cambios para dar mayor certeza y celeridad a los procesos, entre ellos el establecimiento de un plazo de quince días hábiles para la publicación de las resoluciones del Comité de Ministros.

b. Calidad del aire, ruido, contaminación lumínica, radiación electromagnética y olores

Más de diez millones de chilenos están expuestos a niveles de contaminación atmosférica que superan las normas vigentes, principalmente durante los meses de otoño e invierno, y con mayor concentración en la zona centro-sur del país. Las principales fuentes emisoras en zonas urbanas son la combustión residencial de leña y el transporte, mientras que, en zonas industriales y mineras, las fundiciones y termoeléctricas constituyen las fuentes de mayor impacto.

Al inicio del período, se encuentran en distintas etapas de elaboración los Planes de Descontaminación Atmosférica de Valdivia, de la Macrozona del Valle Central de Ñuble y de Copiapó y Tierra Amarilla, todos con procesos de consulta pública ya realizados y pendientes de proyecto definitivo. La revisión de normas primarias de calidad del aire para contaminantes como el material particulado fino, el monóxido de carbono y el plomo se encuentra en proceso. Entre los principales desafíos, se encuentra avanzar en este programa regulatorio, junto con la consolidación del Programa de Recambio de Calefactores, que registra una alta demanda ciudadana en las regiones del sur del país.

c. Biodiversidad e implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

Chile alberga una de las biotas más diversas del planeta, con altos niveles de endemismo, y destina aproximadamente el 21% de su superficie terrestre a alguna figura de protección oficial. Sin embargo, persisten brechas en representatividad de ecosistemas, cobertura en la zona mediterránea central y gestión efectiva de las áreas ya declaradas.

En el marco de la Ley N°21.600, se encuentran en revisión los reglamentos sobre planes de restauración ecológica, clasificación de ecosistemas y especies exóticas invasoras, entre otros.

El desafío para el período es transitar desde la declaración de áreas protegidas hacia su gestión efectiva, con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas plenamente operativo, su dotación profesional consolidada en regiones y los planes de manejo implementados en las principales áreas protegidas del país.

d. Cambio climático

Chile enfrenta los efectos de una mega sequía que lleva más de una década afectando al norte y a la zona central del país, alterando la disponibilidad hídrica para consumo humano, agricultura y generación energética. La Contribución Determinada a Nivel Nacional 2025, publicada en septiembre del año pasado, establece los compromisos de mitigación y adaptación del país al 2030 y proyecta una trayectoria hacia la carbono neutralidad al 2050, en cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático y del Acuerdo de París.

Los siete planes sectoriales de mitigación y los doce planes sectoriales de adaptación exigidos por la Ley Marco de Cambio Climático se encuentran aprobados, mientras que la implementación de estos planes en los distintos ministerios está en diferentes etapas de avance. En este sentido, se encuentra en trámite la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el que está en consulta pública a la fecha.

e. Economía circular y gestión de residuos

La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) se encuentra en implementación progresiva. Al inicio del período, cuatro de los seis productos prioritarios definidos por la ley cuentan con decreto de metas vigente: neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes y pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, este último publicado en mayo de 2026. El proceso regulatorio para baterías ya se encuentra en curso, con la consulta ciudadana del anteproyecto de decreto ya concluida. Por su parte, la regulación de textiles, incorporados como nuevo producto prioritario, se encuentra en etapa inicial.

De esta forma, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando en el diseño y desarrollo de los instrumentos normativos asociados a dicha normativa, con el objetivo de cumplir con los propósitos de la ley: disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.

En materia de gestión de residuos, varias regiones del país operan rellenos sanitarios con capacidad reducida o al límite, y provincias como Osorno y Chiloé deben trasladar sus residuos a distancias considerables, lo que genera costos operativos y ambientales significativos. La generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios continúa siendo elevada, y la tasa de valorización es aún insuficiente para revertir la presión sobre los sitios de disposición final.

Abordar esta situación con soluciones concretas de infraestructura, marcos regulatorios que incentiven la valorización de residuos y un fortalecimiento de la Ley REP es parte central de la agenda del período. La meta es que, al término de este gobierno, Chile haya avanzado desde

iniciativas dispersas hacia sistemas robustos, con respaldo regulatorio y presencia en todo el territorio.

IV. Programación 2026-2027

a. Ajuste integral de la institucionalidad ambiental

En materia ambiental, actualmente persisten brechas de coherencia entre las distintas instituciones y los cuerpos normativos que conforman el sistema. Esta falta de articulación se traduce en pronunciamientos poco uniformes y en mayores niveles de incertidumbre para los titulares de proyectos, las unidades fiscalizables y la ciudadanía, por lo que resulta necesario avanzar hacia un sistema más armónico y consistente.

Para el Ministerio del Medio Ambiente, el bienio 2026-2027 representa una oportunidad para llevar a cabo un ajuste profundo y coherente de la institucionalidad ambiental en su conjunto. Se trata de una meta ambiciosa, pero necesaria y alcanzable, siempre que se sustente en una gestión eficiente tanto en el plano institucional como en el legislativo.

Este ajuste responde a la necesidad de modernizar los procesos de evaluación ambiental, la fiscalización y la judicatura ambiental especializada, tomando en cuenta la experiencia de los años de creación de dicha institucionalidad, con el objeto de adaptarla a los desafíos futuros en materia de protección y conservación ambiental, teniendo presente además los avances tecnológicos.

b. Reforma al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)

En línea con lo anteriormente expuesto, el Ministerio se encuentra en la etapa final de la tramitación del proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esta iniciativa busca cerrar un debate prolongado sobre los ajustes pendientes al sistema, luego de diversos intentos de reforma que no lograron prosperar, y responder a una de las principales fuentes de atraso en la puesta en marcha de iniciativas de inversión.

En este contexto, uno de los objetivos centrales del período es concluir exitosamente la tramitación de esta reforma, proyecto que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

La reforma supondrá un cambio de paradigma en la administración del SEIA. Entre sus principales ejes se encuentran el reforzamiento de la taxatividad de las causales de ingreso al sistema de evaluación, entregando certeza respecto de qué proyectos requieren someterse al proceso; la limitación de los permisos sectoriales mixtos, evitando la duplicación de antecedentes ya requeridos durante la evaluación ambiental; y el establecimiento de una institucionalidad más ágil para el Consejo de Ministros, entre otras mejoras orientadas a abordar diagnósticos pendientes con acciones concreta.

El objetivo es que estos ajustes inauguren una nueva etapa de certeza para todos los actores del sistema, con requerimientos predecibles, procedimientos más ágiles y un SEA consolidado como el ente técnico de excelencia a cargo de la evaluación ambiental, capaz de otorgar permisos con celeridad sin sacrificar los estándares de protección ambiental.

c. Reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)

En el ámbito legislativo, también se espera concluir la reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente. A dieciséis años de su creación, y luego de múltiples estudios que han diagnosticado la necesidad de su reformulación, es necesario contar con una institución que oriente su labor hacia los grandes desafíos de la fiscalización ambiental, considerando la experiencia adoptada durante estos años de operación y los nuevos desafíos identificados.

La SMA actual destina una proporción relevante de sus recursos a materias de menor envergadura: actualmente, el 52% de las denuncias que recibe corresponden a ruidos. Ello refleja una distorsión respecto del rol que esta institución debe cumplir. La reforma busca reorientar su foco hacia los asuntos de mayor impacto ambiental, crear vías de sanción simplificadas para infracciones menores, otorgar mayores garantías a los fiscalizados y posicionar la reparación del medio ambiente como el objetivo primordial del proceso sancionatorio.

En términos institucionales, la reforma contempla la incorporación de nuevos funcionarios especializados, la modernización de procedimientos conforme a las nuevas tendencias del derecho administrativo sancionador, y una redefinición de las funciones de la Superintendencia que le permita ejercer su rol con la contundencia y agilidad que se requiere.

Por último, se espera continuar con la adecuada fiscalización ambiental, reduciendo los plazos de los procesos sancionatorios y el tiempo necesario para la aprobación de los planes de cumplimiento, a fin de asegurar una reparación efectiva y rápida del medioambiente.

d. Implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)

En este mismo periodo, se espera contar con la implementación completa del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con todos sus funcionarios y guardaparques en plena operación, tras el traspaso de funciones, personal y activos desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF). La creación de este servicio fue el resultado de un largo proceso legislativo, y su correcta puesta en marcha constituye uno de los pilares de esta administración, pues implica la consolidación de la institucionalidad ambiental.

Chile posee una biodiversidad única en el mundo, con ecosistemas y especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. El SBAP está llamado a ser el garante de ese patrimonio natural, estableciendo un nuevo estándar en la gestión de parques y áreas protegidas, con capacidad técnica, presencia territorial y vocación de largo plazo. Su implementación exitosa permitirá fortalecer la gestión pública de la biodiversidad y de las áreas protegidas del país.

e. Tribunales Ambientales

En materia jurisdiccional, y en el ámbito de competencia de este Ministerio, se espera lograr, por primera vez desde la creación de los Tribunales Ambientales, el nombramiento completo de todos sus magistrados, tanto titulares como suplentes. Este nombramiento resulta absolutamente indispensable para garantizar la resolución de los conflictos sometidos a su conocimiento dentro de los plazos establecidos por la ley.

A su vez, se espera tramitar una reforma que simplifique el actual sistema de nombramiento judicial, que involucra al Consejo de Alta Dirección Pública, la Corte Suprema, el Presidente de la República y el Senado, configuración que ha generado problemas recurrentes de conformación y demoras en la resolución de conflictos ambientales. Este factor es una de las causas estructurales de las demoras que afectan al sistema ambiental en su conjunto.

f. Gestión de Residuos

En materia de residuos, el diagnóstico es claro: el país enfrenta una situación crítica que exige avanzar con celeridad en soluciones concretas. Esta emergencia requiere una respuesta oportuna, coordinada y con visión de largo plazo.

En coordinación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) y con el Ministerio de Salud, se abordará de manera integral la situación que afecta a distintas regiones del país. Ello no solo considera la apertura de nuevos rellenos sanitarios, sino también su transformación progresiva en centros integrales de tratamiento, con énfasis en el reciclaje y la economía circular.

Asimismo, la incorporación de nuevos productos prioritarios en el marco de la Ley REP -incluyendo pilas, baterías, envases, embalajes y textiles- permitirá fortalecer una gestión de residuos más eficiente y sostenible a nivel nacional.

Estos instrumentos, articulados con una política sistémica, contribuirán a una transición efectiva hacia una economía circular en Chile.

g. Gestión Ambiental y Agilización Institucional

En cumplimiento de su mandato legal, incentivando la ejecución íntegra de la regulación ambiental, el Ministerio ha buscado fortalecer la certeza jurídica de nuestro sistema ambiental dando cumplimiento a los plazos de tramitación según lo establecido en la legislación.

Lo anterior, ha implicado un esfuerzo por resolver los recursos de reclamación que se encontraban pendientes de resolución ante el Comité de Ministros y adoptar las medidas necesarias para que la tramitación de instrumentos ambientales se gestione oportunamente. En efecto, la reducción de tiempos innecesarios de tramitación, dentro del respeto pleno al Estado de Derecho, puede permitir

recuperar el dinamismo de la inversión promoviendo el desarrollo sustentable de Chile y el bienestar de las personas.

Así, dando cumplimiento a la instrucción presidencial, contenida en el Oficio GAB. PRES. N°003 de 11 de marzo de 2026, se adoptaron medidas administrativas orientadas a resolver, dentro de 90 días, los recursos de reclamación presentados respecto de estudios de impacto ambiental de proyectos calificados y pendientes de resolución por el Comité de Ministros.

En conformidad con lo anterior, el Comité de Ministros ha conocido y resuelto los siguientes recursos, presentados respecto de estudios de impacto ambiental de proyectos calificados mediante una resolución de calificación ambiental, que se individualizan con sus correspondientes montos de inversión:

Proyecto	Monto de inversión (en USMM)
Parque Eólico Rinconada, Región de Biobío.	365
Parque Eólico Los Coihues, Región de Ñuble.	470
ERNC Tarapacá, Interregional.	200
Desarrollo Urbano Habitacional Maratúe de Puchuncaví, Región de Valparaíso.	2.000
Modificación Línea 7 Metro de Santiago, Acceso Estación Baquedano, Región Metropolitana.	18
Parque Eólico Junquillos, Región del Bío.	570
Adecuación Operacional Faena Minera Caserones, Región de Atacama.	185
Conexión Vial Ruta 78 hasta Ruta 68, Región Metropolitana.	259
Continuidad Operacional Distrito Pleito Fase 3, Interregional.	32
Edificio Makroceano, Región de Valparaíso.	48
Minera Florida 100, Región Metropolitana.	35
Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud, Región de Los Lagos.	107
EIA Nueva S/E seccionadora Nva Lagunas y nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas – Kimal, Interregional.	195
Hidrógeno Verde Bahía de Quintero, Valparaíso.	30
Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana, Región Metropolitana.	76,49
Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine, Región de Antofagasta.	43,2
Centro Integral de Gestión de Residuos Industriales (CIGRI), Región Metropolitana	85
Proyecto Minero Ciclón Exploradora, Interregional.	125

Proyecto	Monto de inversión (en USMM)
Proyecto Volta- Planta de Hidrógeno y Amoniaco Verde, Región de Antofagasta.	2500
Urbanya Etapa 1, Región Metropolitana.	203
Copiaport-E, Región de Atacama.	450
Parque Fotovoltaico Tamarindo Fase II, Región de Atacama.	250
Continuidad Operacional Relleno Sanitario Los Ángeles, Región de Biobío.	15,5
Regularización Parcelación Punta Puertecillo, Región de O'Higgins.	20
Total	8.282

En los primeros 90 días de Gobierno, el Comité de Ministros ha sesionado en múltiples ocasiones, confirmando las resoluciones de calificación ambiental de 24 proyectos por un monto de inversión total de 8.282 millones de dólares. Este resultado refleja un período de alta actividad en la revisión de instrumentos de calificación ambiental que se encontraban pendientes de solución.

Por otra parte, también durante el primer trimestre de gobierno, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental avanzó en la resolución de 27 recursos de reclamación, presentados respecto de declaraciones de impacto ambiental de proyectos calificados mediante una resolución de calificación ambiental que se encontraban pendientes de pronunciamiento, y que involucran un monto total de inversión equivalente a 6.971 millones de dólares.

En particular, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental resolvió los recursos de reclamación referidos a los siguientes proyectos:

Proyecto	Monto de inversión (en USMM)
Exploraciones Aida, Región de Antofagasta.	1
Exploración Geológica Minera – Champagne, Región de Arica y Parinacota.	18
Sistema de Almacenamiento de Energía Altair, Región del Maule.	240
PMGD Coloane, Región de Los Lagos.	16
Ampliación del Pozo de Extracción de Áridos Cantera Quillén, La Araucanía	0,05
Parque Fotovoltaico Llanos del Sol, Región de Tarapacá.	635
Modificación Pila de Lixiviación Sulfolix El Abra, Región de Antofagasta.	741
Proyecto Defensas Fluviales Río Elqui Sector Ruta 5 Desembocadura, Región de Coquimbo.	1,35

Proyecto	Monto de inversión (en USMM)
Parque Solar BESS Cuyumillaco, Región del Maule.	200
Sistema de Almacenamiento de Energía y Línea de Transmisión BESS Pueblo Hundido, Región de Atacama.	400
Modificaciones Operacionales en Planta Concentradora Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada, al Interior de Minera Escondida, Región de Antofagasta.	2.351
Parque Fotovoltaico Solar Oriente, Región de Tarapacá.	990
Proyecto Loteo Urbano Mirador Ritoque, Región de Valparaíso.	6,18
El Charco, Región del Maule.	7
Planta de tratamiento de aguas servidas Santa María, Región Metropolitana.	1,5
Mini central hidroeléctrica Los Maquis (Puerto Guadal), Región de Aysén.	12
Energética Solar Las Nieves, Región de O'Higgins.	18
Parque Solar Platero, Región Metropolitana.	15
Continuidad Operacional Minera Tres Valles, Región de Coquimbo.	30
BESS El Molino, Región de Los Lagos.	233
Brisas de Torobayo, Región de Los Ríos.	48,7
Aumento vida útil Planta Catemu (Proyecto AVU), Región de Valparaíso.	2
Nueva Línea 2x220 kv Gamboa-Chonchi, Región de Los Lagos.	26,43
Proyecto Fotovoltaico Mineru Solar, Región del Maule.	100
Parque Fotovoltaico y Línea de Transmisión Pita Solar, Región de Tarapacá.	320
Proyecto La Ramirana (Tratamiento de Purines), Región de O'Higgins.	8
Parque Fotovoltaico Ramaditas, Región de Tarapacá.	550

Lo expuesto refleja el énfasis de la actual Administración en una tramitación eficaz y eficiente de los procedimientos administrativos. En cumplimiento de la instrucción presidencial, se gestionaron los recursos de reclamación pendientes de resolución ante el Comité de Ministros y el Servicio de Evaluación Ambiental. Con ello, junto con otras medidas, se busca entregar mayor certeza jurídica a los titulares de proyectos de inversión respecto de su implementación y desarrollo.

En síntesis, el bienio 2026-2027 estará marcado por el objetivo de avanzar en ajustes y fortalecimientos en distintos niveles de la institucionalidad ambiental chilena. Los principales desafíos

y materias pendientes han sido identificados y analizados previamente, y este periodo contempla el desarrollo de medidas orientadas a abordarlos. Para ello, se considera la coordinación y el trabajo conjunto de las distintas instituciones del sector, con miras a fortalecer el funcionamiento del sistema ambiental en los próximos años.

V. Programación 2026-2030

A lo largo del período de gobierno, el Ministerio del Medio Ambiente tiene el mandato de fortalecer la gestión ambiental del país, avanzando en la implementación de políticas, instrumentos y acciones orientadas a generar resultados concretos, medibles y sostenidos en el tiempo.

El objetivo esperado no es sólo normativo ni institucional, sino también promover la incorporación progresiva de criterios de sostenibilidad y cuidado del entorno en los distintos ámbitos del desarrollo del país, mediante decisiones responsables y con certezas para los distintos actores involucrados.

Dicho mandato se traduce en tres pilares, que constituyen la base de la planificación que realizará el Ministerio y que se detallan a continuación:

1. Biodiversidad e institucionalidad

El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) deberá estar plenamente consolidado al término del actual período presidencial, administrando con estándares definidos la segunda mayor extensión de tierras del Estado después del Ministerio de Bienes Nacionales.

Se busca la consolidación de la presencia del SBAP en las 16 regiones del país, como un elemento prioritario para asegurar que el Servicio actúe como una autoridad técnica con arraigo local y capacidad de articulación. Para lograrlo, es fundamental concretar el traspaso de funciones, bienes y personal desde CONAF y otros organismos, garantizando siempre la continuidad operativa y el resguardo de la experiencia acumulada en la administración de parques, reservas y monumentos naturales. Lo anterior, en un esfuerzo mancomunado entre el SBAP, la CONAF, y los Ministerios del Medio Ambiente y Agricultura, con el correspondiente apoyo de la Dirección de Presupuestos y el Servicio Civil.

En el ámbito regulatorio, el compromiso es completar la implementación de la Ley N°21.600 a través de reglamentos clave que habiliten instrumentos de protección para ecosistemas amenazados y especies exóticas invasoras, a fin de preservar estas reservas de la biósfera mediante esta nueva institucionalidad.

Se espera integrar las áreas protegidas bajo un sistema único y moderno que homologue estándares de manejo y fomente la participación de comunidades locales y pueblos indígenas. Asimismo, se busca consolidar el Sistema de Información de la Biodiversidad (SIB) como la principal herramienta pública de decisión, asegurando que la ciencia y los datos garanticen la transparencia, la trazabilidad y la calidad de la evaluación ambiental y la fiscalización.

Mirando hacia el futuro, el Servicio operativizará el Fondo Nacional de la Biodiversidad e instrumentos económicos innovadores para financiar la conservación más allá de las áreas silvestres, alcanzando paisajes productivos y humedales degradados.

Se fortalecerá la coordinación interinstitucional permanente con ministerios y servicios para elevar los estándares técnicos en todo el territorio. Con este despliegue, se avanza en la construcción de una nueva institucionalidad ambiental capaz de responder con eficacia a las expectativas del país y a los desafíos climáticos globales.

Tras un período dedicado al diseño de procesos, convenios y gobernanza, el Servicio debe transformar esas bases en una gestión territorial robusta y en decisiones técnicas de alto impacto.

Este proceso de maduración institucional requiere, además, forjar una cultura organizacional unificada que integre las diversas trayectorias de sus equipos bajo una identidad común, basada en la excelencia, la probidad y un profundo sentido de misión pública.

2. Agilización institucional

Uno de los compromisos del Ministerio en este período es demostrar que el Estado puede cumplir los plazos legales de manera efectiva. Aunque la meta parece simple, implica un cambio profundo en la relación entre la institucionalidad ambiental y la ciudadanía.

La agilización institucional no es un objetivo meramente técnico: es una condición de legitimidad. El incumplimiento de los plazos retrasa el desarrollo de las comunidades, erosiona la confianza pública y pone en riesgo proyectos valiosos por razones ajenas a su mérito ambiental.

En este contexto, la gestión del SEA se orientará al cumplimiento de las prioridades estratégicas del programa de gobierno, fortaleciendo la eficiencia del SEIA, elevando los estándares técnicos y consolidando su rol rector priorizando la eficiencia y gestión, con la reducción de los tiempos de tramitación mediante la estandarización de etapas críticas, la optimización de flujos de trabajo y el fortalecimiento de herramientas digitales.

Asimismo, se reforzará la coordinación con los organismos de competencia ambiental, para asegurar respuestas oportunas y articuladas, bajo un seguimiento permanente de indicadores que permita resolver cuellos de botella.

A su vez, para aumentar la certeza jurídica, se continuará con el proceso de revisión y consolidación de guías e instructivos para unificar criterios a nivel nacional y reducir la dispersión interpretativa. En paralelo, se fortalecerá el control de calidad técnica y jurídica de los pronunciamientos, asegurando decisiones consistentes, fundadas y predecibles.

Del mismo modo se impulsará una modernización institucional, impulsando iniciativas como la mejora de la experiencia usuaria, la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, el programa Estado Verde y la transformación digital integral, que mejoren el sistema en su conjunto.

Estas acciones se implementarán resguardando la continuidad operativa del SEIA, la participación ciudadana y la adecuada atención de los grupos de interés. Al término del período, el sistema deberá operar de forma responsable, exigiendo también un estándar más alto a los titulares para que presenten información completa y de calidad desde el inicio de sus trámites.

La meta es que el Estado y el sector privado trabajen bajo una coordinación que logre decisiones más rápidas, mejor fundamentadas y legítimas. Hacia 2030, proyectamos un SEIA más ágil y con

mayor certeza jurídica y una institucionalidad capaz de responder oportunamente a los desafíos del desarrollo sostenible.

Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente, en línea con la agilización institucional, avanzará en la consolidación de un enfoque estratégico de fiscalización y cumplimiento ambiental preventivo. Este enfoque estará orientado a detectar tempranamente potenciales incumplimientos y a desplegar respuestas eficaces, proporcionales y disuasorias cuando corresponda, combinando el uso de herramientas tecnológicas, analítica de datos y mecanismos de asistencia al cumplimiento del regulado.

Uno de los principales énfasis será la adecuada gestión de residuos en el marco de la Ley REP. En concreto, la SMA fortalecerá el proceso de registro de generación y gestión de residuos de productos prioritarios, unificará criterios para la verificación del cumplimiento de metas de recolección y valorización, y promoverá la regularización de productores y consumidores industriales.

Asimismo, esperamos que se encuentre completamente tramitada la ley que actualmente se encuentra en segundo trámite Constitucional en el Congreso, que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental de la Superintendencia del Medio Ambiente, para modernizar esta institución, permitiendo procesos más ágiles, una focalización de esfuerzos de fiscalización, avanzando hacia un nuevo estándar para este servicio.

En conjunto, estas acciones buscan fortalecer una fiscalización preventiva y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sancionatorio en materia ambiental.

Esperamos que, al fin del periodo, con ajustes tanto institucionales como legales, la Superintendencia puede erigirse como un ente altamente técnico, con fuerte presencia territorial en sus fiscalizaciones, eficiente y previsible, coordinado con otros organismos de la institucionalidad ambiental a fin de elevar la calidad y presencia de esta institución clave para el resguardo del medioambiente y el adecuado cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental.

3. Gestión de residuos

Los rellenos sanitarios del país enfrentan hoy una situación crítica que no puede postergarse. Varias regiones operan al límite de su capacidad, y provincias como Osorno y Chiloé deben trasladar sus residuos cientos de kilómetros, generando pasivos ambientales inaceptables. Esta emergencia es, al mismo tiempo, una oportunidad: Chile tiene la posibilidad de rediseñar su relación con los residuos y avanzar hacia una economía circular real.

La meta para 2030 es haber transitado desde iniciativas aisladas hacia sistemas robustos, distribuidos en las diversas comunidades y regulatoriamente respaldados. Esto implica soluciones de infraestructura para las regiones más críticas, nuevos marcos regulatorios que incentiven la valorización de residuos como insumos productivos, y el fortalecimiento de la Ley REP como palanca de cambio cultural e industrial. Los residuos dejarán de ser el símbolo de lo que postergamos para convertirse en el símbolo de lo que somos capaces de transformar.

Dicho desafío implicará un trabajo de adecuación de los instrumentos normativos asociados a la Ley REP, atendido los plazos de su publicación el año 2016. En este sentido, a diez años de dicha publicación ya existe suficiente experiencia práctica acerca de los desafíos asociados a la implementación de la ley y sus instrumentos normativos, lo que se traducirá en las correspondientes

adecuaciones para buscar la correcta aplicación de la norma, con énfasis en disminuir los niveles de generación de residuos y fomentar su reutilización, así como potenciar el reciclaje y su valorización.

4. Información Ambiental

La División de Información y Economía Ambiental ha continuado fortaleciendo las capacidades institucionales para la generación, sistematización y difusión de información ambiental estratégica. En este marco, se elabora el Resumen Ejecutivo del Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025 (REMA 2025), instrumento que sintetiza los principales antecedentes, tendencias e indicadores ambientales del país, permitiendo acercar información técnica y accesible tanto a la ciudadanía como a los tomadores de decisión.

La elaboración de este documento se desarrolla conforme al mandato de la Ley N°19.300 y en línea con estándares internacionales como el Acuerdo de Escazú y las recomendaciones de la OCDE, consolidando un trabajo colaborativo con más de 70 servicios públicos y organismos sectoriales. Asimismo, el proceso incorpora metodologías internacionales de análisis ambiental, fortaleciendo la calidad, trazabilidad y comparabilidad de la información disponible para la gestión pública.

Este trabajo permite avanzar en la consolidación de una visión integrada sobre el estado del medio ambiente en Chile, abordando materias como biodiversidad, aguas continentales, calidad atmosférica, economía circular, océanos y cambio climático, entre otras. A través de indicadores actualizados y herramientas de visualización, el reporte contribuye al fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), promoviendo una gestión pública basada en evidencia y apoyando la toma de decisiones ambientales a nivel nacional y regional.

Junto con lo anterior, la División continúa avanzando en la modernización y fortalecimiento de los instrumentos de información ambiental, favoreciendo una mayor transparencia, acceso público a los datos y articulación interinstitucional.

Estas acciones buscan consolidar capacidades permanentes para el monitoreo ambiental del país y mejorar la disponibilidad de información estratégica para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia ambiental.

5. Calidad del Aire

El Plan de Recambio de Calefactores continúa su implementación en el marco de la política de calefacción sustentable, focalizando sus acciones en comunas ubicadas en zonas saturadas y con planes de descontaminación atmosférica vigentes, entre las regiones de O'Higgins y Aysén. Esta política busca contribuir a la reducción de emisiones provenientes de la combustión residencial a leña, promoviendo alternativas de calefacción más eficientes y de menor impacto ambiental.

Durante el período 2025-2026, el programa mantiene procesos de postulación y recambio en distintas comunas del país, registrando una positiva recepción por parte de la ciudadanía y una alta participación en diversas regiones. Destacan particularmente las regiones del Biobío y O'Higgins, donde se registran importantes niveles de sobredemanda. En el caso del Biobío, las postulaciones en el Concepción Metropolitano alcanzan un 563% en equipos de aire acondicionado y un 1.316% en equipos a pellet, mientras que en Los Ángeles las postulaciones llegan a un 871% y 1.411%, respectivamente. Por su parte, en la Región de O'Higgins, las postulaciones alcanzan un 239% en equipos de aire acondicionado y un 458% en calefactores a pellet. Asimismo, en Los Ríos, Valdivia

registra una demanda equivalente al 260% en aire acondicionado y 217% en pellet, evidenciando una alta valoración ciudadana del programa.

En paralelo, se continúa trabajando coordinadamente con los Gobiernos Regionales para fortalecer la implementación territorial del programa y ampliar el acceso a sistemas de calefacción sustentable. Este trabajo conjunto ha permitido avanzar en el recambio de calefactores a leña por equipos de aire acondicionado -que no solo permiten calefaccionar en invierno, sino también climatizar viviendas durante períodos de altas temperaturas- y calefactores a pellet, contribuyendo tanto a la mejora de la calidad del aire como al confort térmico de los hogares.

A nivel nacional, a mayo de 2026, las postulaciones acumuladas superan ampliamente la disponibilidad de equipos en gran parte de las líneas de recambio. Entre los principales resultados destacan: Temuco y Padre Las Casas con una demanda equivalente al 140% en aire acondicionado y 222% en pellet; Talca y Maule con 242% y 167%, respectivamente; Osorno con 232% y 83%; manteniéndose procesos activos en diversas etapas según cada territorio.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a avanzar hacia sistemas de calefacción más limpios y eficientes, especialmente en territorios afectados por contaminación atmosférica residencial, fortaleciendo al mismo tiempo la coordinación interinstitucional y el trabajo territorial con actores regionales y locales.

Teniendo presente todo lo anterior, durante este año 2026 y para los próximos años se busca aumentar los niveles de instalación de calefactores en el marco del programa, y, por tanto, del alcance de las mejoras asociadas en materia de calidad de aire. Lo anterior, a través de mejoras de gestión por parte del Ministerio del Medio Ambiente en los procesos internos asociados al proceso, así como priorización en las tareas asociadas de los equipos regionales encargados de los procedimientos de postulación y asignación de los equipos calefactores.

Cuenta Pública 2026

— Participativa —

Ministerio del Medio Ambiente
Región del Biobío



I.- PRESENTACIÓN

La Seremi del Medio Ambiente Región del Biobío está compuesto por un equipo de profesionales comprometido con la protección, la educación, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible de la Región del Biobío. El que se enfoca en cinco áreas clave:

Biodiversidad y Áreas Protegidas: Trabajamos para conservar y proteger la biodiversidad de nuestra región del Biobío y preservar áreas naturales únicas.

Calidad del Aire y Cambio Climático: Nos esforzamos por mejorar la calidad del aire y mitigar los efectos del cambio climático en nuestra comunidad.

Educación Ambiental y Participación Ciudadana (EDUPAC): Creemos que la educación ambiental y la participación ciudadana son fundamentales para construir un futuro más sostenible. Por eso, trabajamos para educar y empoderar a nuestra comunidad en temas ambientales, así como también desde los municipios potenciamos la incorporación de temas ambiente.

Economía Circular: Promovemos prácticas sostenibles y reduciendo residuos para crear un futuro más circular y responsable.

Administración y finanzas: Su fin principal es asegurar la disponibilidad de fondos y bienes para cumplir los objetivos del Estado bajo estrictas normas de probidad y transparencia.

Además, estamos trabajando en programas y proyectos específicos para abordar desafíos ambientales en nuestra región, como:

Transición Socioecológica Justa: estamos comprometidos con la justicia social y ambiental en territorios vulnerables. Nuestro Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) de Coronel y el Consejo Para la Recuperación Ambiental y Social de Coronel (CRAS) son ejemplos de nuestro trabajo en esta área.

Así como también encontramos la unidad de **Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), Administración y Finanzas, OIRS, y Secretaría Regional.**

El equipo está compuesto por profesionales apasionados y comprometidos con la misión de proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible en nuestra región. Estamos orgullosos de trabajar junto a nuestra comunidad y otros actores para crear un futuro más sostenible y justo para todas todos.

II.- Ejecución presupuestaria

Región	Concepto Presupuestario	Requerimiento M\$	Devengado M\$	% Ejecución
Biobío VIII	21 Gastos en personal	3.344.140	3.344.140	100%
	22 Bienes y servicios de consumo	107.777.307	106.103.087	98%
	24 Transferencias corrientes	583.845.584	578.679.646	99%
	29 Adquisición de activos no financieros	309.970	309.970	100%
Total presupuesto		695.277.001	688.436.843	99%

III. Principales Logros Alcanzados durante el 2025 Región del Biobío

E D U P A C

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (SCAM)

Es un sistema de carácter voluntario que permite a los municipios instalar en el territorio un modelo de gestión ambiental de manera transversal en su orgánica, infraestructura, personal, procedimientos internos y servicios que presta a la comunidad.

En este contexto, se busca fortalecer las capacidades técnicas tanto de los municipios como de las organizaciones ciudadanas, promoviendo su participación activa frente a los desafíos que plantea el cambio climático y la necesidad de desarrollar estrategias locales para prevenir y enfrentar sus impactos. Asimismo, el SCAM promueve la participación de la ciudadanía en la planificación y gestión ambiental comunal, a través de los Comités Ambientales Comunales y las Mesas de Gobernanza Ambiental Comunal, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza local.

Durante el año 2025 se dio inicio al programa piloto SCAMS, Sistema Certificación Ambiental Municipio Sustentable, una nueva modalidad en la certificación ambiental municipal con un programa piloto que incluye, en un principio, a cinco Municipios de la región y que otorga Sellos Ambientales para la certificación ambiental de los Municipios.

La Región del Biobío ha implementado el programa SCAM en 32 comunas, las cuales cuentan con un nivel de certificación acreditado.

Durante el año 2025 se dio continuidad al apoyo técnico a los 21 municipios que han dado continuidad al proceso de certificación lo que incluyó la realización de 43 auditorías, presenciales y telemáticas con sus respectivos informes enviados a los Alcaldes/as y se realizó la revisión de 13 expedientes que postulaban a distintas fases de certificación.

ESTADO VERDE

El Programa **Estado Verde** es una estrategia de autogestión ambiental, cuyo objetivo es promover la incorporación de la gestión ambiental en las instituciones públicas, así como en empresas y organizaciones privadas, procurando que tanto sus instalaciones físicas como sus procesos administrativos incorporen políticas y principios orientados al cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales.

Se elabora un programa de trabajo que considera la sustentabilidad en distintos ámbitos del funcionamiento de las oficinas, tales como el uso eficiente de materiales, la adquisición de productos y servicios, el manejo adecuado de residuos, el uso racional del agua y de la energía eléctrica, y la capacitación y sensibilización de los colaboradores, entre otros. Estas acciones contribuyen a mejorar el desempeño ambiental de las instituciones y a disminuir su huella de carbono.

Actualmente se cuenta con cuatro instituciones privadas bajo el alero del Estado Verde:

- **Teatro Regional Región del Biobío**, se inició el 21 de agosto de 2023. El Teatro regional aprobó la pre acreditación el nivel básico, nivel intermedio y actualmente se encuentra en mantención del Nivel intermedio.
- **Asmar Talcahuano**, firmo el convenio Oficina Verde y se realizó la primera auditoría de Pre-acreditación.
- **Otro Ejecutivo**, firmó Oficina Verde el convenio y próximamente se realizará la primera auditoría.
- **El Juzgado de Letras, Familia, Laboral y Cobranza de Cañete**, firmó el convenio del programa Estado Verde el 28 de diciembre de 2022 mediante la Resolución Exenta N° 1612 del MMA.

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (FPA)

Es el primer fondo concursable de carácter nacional con que cuenta el Estado de Chile para apoyar iniciativas ambientales presentadas por la ciudadanía creado mediante la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente

Este fondo permite que personas jurídicas, de derecho privado y sin fines de lucro, tales como Organizaciones Comunitarias, Territoriales o Funcionales (Juntas de Vecinos, Consejos Vecinales de Desarrollo, Centros de Madres, Centros Culturales y Artísticos, Organizaciones Juveniles, Organizaciones Deportivas, entre otras), ONG, Fundaciones, Corporaciones, Comunidades Indígenas y Centros de Padres y/o apoderados, puedan presentar sus proyectos en los distintos concursos anuales, cumpliendo con las condiciones que señalan las Bases Especiales de cada concurso.

Durante el año 2025, en la Región del Biobío, se ejecutaron un total de 8 proyectos financiados por el FPA. Estos proyectos abordaron temáticas como: Cambio Climático y Descontaminación ambiental, Economía circular y gestión de residuos, Eficiencia energética, Valoración y conservación de la biodiversidad, generando un impacto directo en las personas beneficiadas.

El monto total ejecutado durante el período 2024 por los proyectos financiados en la región fue de \$48.000.000

SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (SNCAE)

Es un programa de carácter voluntario creado en el año 2003, cuyo objetivo es incorporar la educación ambiental de manera integral en las comunidades educativas del país. Esta integración se realiza de forma transversal en tres ámbitos: curricular pedagógico, gestión y relaciones con el entorno.

A través del SNCAE, se otorga una certificación ambiental a los establecimientos que implementan metodologías y estrategias acordes a su realidad socioambiental. La certificación se otorga en tres niveles: Básico, Medio y Excelencia, según el cumplimiento de la Matriz Ambiental, instrumento central que guía el proceso de autoevaluación, planificación y mejora continua.

Pueden participar establecimientos educacionales de todas las dependencias administrativas, desde educación parvularia hasta educación media, rurales o urbanos, generando un compromiso colectivo por una educación ambiental orientada al desarrollo sostenible.

Actualmente, la región del Biobío cuenta con 348 establecimientos educacionales con certificación ambiental vigente en los distintos niveles de certificación.

El SNCAE en la Región del Biobío es liderado por el Comité Regional de Certificación Ambiental, instancia intersectorial encargada de coordinar y promover la implementación del programa en la región. Este comité es coordinado por la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente e integrado, además, por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y Deporte, CONAF, JUNJI, Fundación Integra, JUNAEB, y los SLEP Andalien Sur y Costa.

Durante el período se desarrollaron jornadas formativas, acompañamiento técnico y seminarios dirigidos a docentes y equipos de gestión de establecimientos SNCAE, orientados a fortalecer las capacidades para el trabajo ambiental en aula y comunidad. Destacan el Seminario de Cambio Climático, enfocado en incorporar acciones preventivas y de respuesta en los Planes de Seguridad Escolar, y el Seminario Internacional “Comunidades educativas frente al cambio climático”, que abordó ciencia comunitaria, participación y metodologías pedagógicas para el aprendizaje ambiental.

Durante el año 2025, no hubo presupuesto para la implementación del programa SNCAE en la región, lo realizado fue a través de gestión y articulación con otras instituciones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PAC)

Considera el involucramiento activo de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas, esto porque el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones.

El compromiso de promover los espacios en donde los vínculos con las organizaciones logren influir activamente en la toma de decisiones y en el diseño de las políticas públicas, porque sabemos que más participación es más democracia.

Entre los mecanismos están los **Consejo Consultivos** que creados por la Ley 19.300 y están conformados de manera diversa, representativa y pluralista por representantes del sector público y privado, la academia, organizaciones ambientalistas y sindicato de trabajadores.

Durante el 2025 se realizaron 10 sesiones ordinarias, con un Plan de Trabajo que contemplo diversas acciones de interés, entre ellas, reuniones con las autoridades de turno donde se les informó de la labor que realiza en Consejo Consultivo y se invitó a participar de una de las sesiones con el objetivo de desarrollar acciones conjuntas.

Además, se invitaron a las sesiones a los defensores ambientales en la Región del Biobío, se entregaron los avances de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático en el contexto de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. El estado de los Planes de Prevención y Descontaminación Atmosférica y avances en la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) entre otros temas.

Durante este Consejo Consultivo se desarrollaron diversas acciones de difusión, finalizando con el seminario “**Acceso a la Justicia Ambiental**” el que fue incluido en la Escuela de Verano 2026 de la Universidad de Concepción, denominada este “**Ampliando fronteras desde el Sur del Mundo**”, donde a través de una presentación central y un panel de conversación se instaló un espacio de diálogo y reflexión entre distintos actores en torno a materias de especial relevancia para la protección del medio ambiente y los derechos de las personas. Dicha actividad se realizó el 15 de enero de 2026 en el Auditorio Galletué del Centro EULA, de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción

En noviembre se cerró el proceso de renovación de los integrantes, los que fueron nombrados por un período de dos años y se cuenta con la totalidad de los cupos cubiertos.

En relación a las **Consultas Ciudadanas**, conjuntamente, se realizan varios procesos de Consultas Ciudadanas, mecanismo que busca adsorber las propuestas y aportes de la ciudadanía y de los grupos de interés con torno a la normativa que se somete a consulta a través de difusión de estas.

Además, se desarrolló una **Consulta Indígena** a nivel nacional que nace de la necesidad de dialogar con las comunidades con las materias a regular relacionada con los reglamentos de áreas protegidas y sitios prioritarios que se establecen en la Ley 21.600, que recoja la opinión de los distintos pueblos indígenas que habitan o utilizan los territorios.

En la Región del Biobío se realizaron 20 reuniones en los cuatro territorios (Arauco, Alto Biobío, Bajo Biobío y Concepción) en las etapas de planificación, información y deliberación interna, Más tres reuniones de Dialogo Regional. El cierre de este proceso fue con dos representantes por cada uno de los territorios en el Dialogo Nacional

El Acuerdo de Escazú, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que garantiza el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Su gobernanza se materializa a través de los Comités Regionales que son instancia de participación formal y representativa de distintos sectores de la sociedad, con la finalidad principal dar seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú, a nivel regional y local.

Solo en 5 regiones del país existen estos comités de manera piloto: Coquimbo, Biobío, Los Ríos, Aysén y Magallanes. En las demás regiones, la gobernanza regional de Escazú, es asumida por los Consejos Consultivos Regionales del Medio Ambiente actualmente vigentes.

En la región del Biobío la conformación del **Comité Regional de Escazú de la Región del Biobío**, fue el 03 de diciembre de 2025 en el Museo de Historia Natural, y quedo integrado por 16 representantes de la administración del Estado, de las municipalidades de la región, de la academia, del sector privado o empresarial y de la sociedad civil.

Se han realizado 8 sesiones del Comité Regional de Escazú, las que se iniciaron con un ejercicio de priorización regional donde se identificaron las líneas estratégicas del PIPE y se acuerda la conformación de comisiones temáticas de trabajo. Lo que se materializa a través de reuniones semanales (todos los jueves) para ir armando los proyectos participativamente en comisiones, con el objetivo de elaborar proyectos para su implementación a través del financiamiento Chile—México.

Además, se han abordado en las sesiones temas como el Protocolo de Defensores Ambientales y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Procedimiento, RCA y los mecanismos de impugnación.

CAMBIO CLIMÁTICO

El área de Cambio Climático de la Seremi del Medio Ambiente del Biobío tiene como propósito liderar y coordinar la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley N° 21.455) a nivel regional.

Entre sus funciones estructurales destaca actuar como Secretaría Técnica del Comité Regional de Cambio Climático (CORECC), liderar la formulación e implementación del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC), y apoyar técnicamente a las 33 municipalidades de la región en la elaboración de sus Planes de Acción Comunales de Cambio Climático (PACCC).

Asimismo, el área gestiona articulaciones intersectoriales e instancias de contraparte técnica en proyectos clave, tales como:

- Acuerdos de Producción Limpia (APL Hortícola, Arándanos, Pesqueros y Bosque Nativo) con la ASCCH.
- Evaluación ambiental estratégica e instancias del SEIA como evaluador sectorial en riesgo climático.
- Proyectos comunitarios de resiliencia hídrica, electromovilidad y prevención de riesgos post-incendios forestales junto al GORE.

Aprobación y Difusión del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC Biobío):

Elaborado de forma participativa junto al CORECC, el PARCC define 14 riesgos climáticos prioritarios (olas de calor, seguridad hídrica, incendios forestales, marejadas, pérdida de biodiversidad, etc.) y un conjunto de medidas de adaptación y mitigación con un periodo de ejecución a 5 años.

Se desarrolló una campaña regional de difusión masiva (radial y en plataformas digitales/Instagram) para informar a la ciudadanía e instituciones sobre los ejes y acciones del PARCC. Proceso de elección para incorporar a representantes de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas al CORECC.

Fortalecimiento de Capacidades Municipales en Cambio Climático:

Programa de Capacitación en PACCC: Realización de jornadas de transferencia técnica dirigidas a los equipos municipales de la región para fortalecer la formulación, seguimiento y diseño de indicadores de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de sus Planes de Acción Comunales.

Ejecución del Proyecto Piloto de Restauración Hídrica Comunitaria (Mina Costa, Lebu):

Licitación e implementación de una Solución Basada en la Naturaleza (SbN) para el almacenamiento y captación de agua potable a partir de una vertiente en la comunidad rural costera de Mina Costa. Se instaló un estanque de almacenamiento de 10.000 L, 220 m de red de conducción de agua, filtros naturales, cercado perimetral de protección (55 m), control de especies exóticas invasoras y un Manual de Gestión Comunitaria del Agua.

Encuentro Regional "Biobío Restaura Humedales":

Realizado el 11 de diciembre de 2025 en el Parque Humedal Los Batros (San Pedro de la Paz).
Espacio abierto a la comunidad que reunió talleres de restauración, avistamiento de aves, feria de más de 30 proyectos sostenibles y una charla magistral de sensibilización climática con alta convocatoria regional.

Hito de Implementación de la Primera Medida del PARCC (SbN en Lebu):

Se ejecutó con éxito el proyecto piloto "Restauración y áreas claves para el almacenamiento y provisión de agua a escala comunitaria" en la localidad rural de Mina Costa, comuna de Lebu.

Este hito constituyó la primera acción concreta en terreno de implementación del PARCC Biobío vinculada a Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). Se instaló un sistema de captación y almacenamiento de agua de 10.000 litros con filtros naturales, un cercado perimetral de protección de 55 metros en la vertiente, control de vegetación exótica invasora y la elaboración participativa de un Manual de Gestión Comunitaria del Agua junto a las familias recolectoras de orilla.

Despliegue del Programa de Capacitaciones Municipales en PACCC:

Se dictaron talleres formativos y jornadas provinciales teórico-prácticas orientadas a los equipos técnicos de los municipios de la región.

La capacitación abordó las fases de elaboración de los Planes de Acción Comunes de Cambio Climático (PACCC), la caracterización de vulnerabilidad local, el uso de la plataforma HuellaChile para inventarios de GEI y, de manera central, el diseño de indicadores de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para asegurar que las medidas comunales sean medibles y operativas.

Hito de Convocatoria Pública y Apertura del CORECC a la Sociedad Civil:

Se gestionó y ejecutó el proceso de convocatoria regional para la elección e incorporación formal de representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas al Comité Regional de Cambio Climático (CORECC 2025), garantizando una gobernanza climática inclusiva y participativa.

Realización del Encuentro Regional "Biobío Restaura Humedales":

Organización y ejecución del evento masivo de restauración y educación ambiental en el Parque Humedal Los Batros (San Pedro de la Paz) el 11 de diciembre de 2025.

El encuentro reunió a más de 30 proyectos y emprendimientos sostenibles, talleres de restauración, avistamiento de aves y una charla magistral climática, consolidándose como un espacio de encuentro entre la ciudadanía, la academia y la institucionalidad pública.

Campaña de Difusión de Alto Impacto del PARCC:

Se diseñó y ejecutó una campaña de medios que incluyó una pauta radial en Radio Punto 7 (90.9 FM) con 6 emisiones diarias durante el tramo de mayor sintonía (alcanzando una cobertura estimada del 70% del Gran Concepción y una audiencia potencial de 800.000 personas), complementada con pautas digitales segmentadas en Instagram/Facebook con más de 27.000 visualizaciones e interacciones directas con la comunidad.

OFICINA ECONOMÍA CIRCULAR (OEC)

La OEC desarrolla su trabajo regional en torno a la implementación de la Política Pública de Residuos, destacándose:

- Implementación de la Ley 21.368 de Plásticos de un Solo Uso (PUSU)
- Implementación de la Ley 20.920 de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP)
- Implementación de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO);
- Implementación de la Política de Inclusión de Recicladores de Base.

En el ámbito de la Ley REP, durante 2025 se realizaron periódicamente mesas y reuniones de trabajo orientadas a abordar el avance de su implementación y las metas de reciclaje de envases y embalajes y neumáticos, procurando entregar información oportuna a los 33 municipios de la Región del Biobío. Estas instancias se desarrollaron de manera itinerante en comunas de las tres provincias de la región, fortaleciendo la coordinación con los actores involucrados y ampliando el alcance territorial de las acciones. Asimismo, se realizó la Primera Cumbre de Economía Circular de la Región del Biobío, junto con una activa participación en la Campaña Teletón y en la Semana del Reciclaje, contribuyendo a la difusión y promoción de prácticas asociadas a la prevención, reutilización y valorización de residuos.

En materia de Plásticos de un Solo Uso, se realizaron capacitaciones dirigidas a los 33 municipios de la Región del Biobío, orientadas a informar y prepararlos con respecto del anteproyecto y los desafíos asociados a su implementación.

Respecto de la gestión de residuos orgánicos, se realizaron capacitaciones dirigidas a municipios y establecimientos educacionales, además de gestiones para la obtención de financiamiento destinado al diseño de una Planta de Compostaje en la comuna de Curanilahue. Asimismo, se avanzó en la implementación del Fondo para el Reciclaje (FPR) orientado al compostaje en la comuna de Talcahuano.

En materia de inclusión de recicladores de base, se realizaron gestiones orientadas a la formalización de Cooperativas y al fortalecimiento de las condiciones de trabajo de los recicladores de base de la Región del Biobío, incluyendo la ampliación de comodatos para sus lugares de operación.

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATEGICA EAE

El área de planificación ambiental estratégica de la Seremi del Medio Ambiente (Seremi MMA) de la Región del Biobío se encarga de asesorar a los órganos de la administración del Estado que deben aplicar la evaluación ambiental estratégica (EAE) a la formulación o modificación de planes y políticas públicas como: plan regional de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales o metropolitanos, planes reguladores comunales (PRC), zonificación costera regional, manejo de cuencas hidrográficas, entre otros.

Asimismo, esta área representa a la Seremi en instancias de discusión estratégica de proyectos de infraestructura pública, planes estratégicos de recursos hídricos de las cuencas priorizadas por la DGA, planificación ecológica, mesa estratégica de recursos hídricos de la cuenca del río Biobío y en general, todo lo que tenga que ver con la incorporación de la dimensión ambiental e intercultural en instrumentos de ordenamiento territorial.

Principales logros durante el 2025:

- i. Colaboración con los municipios de Cabrero, Coronel y Talcahuano en la aplicación de la EAE a la actualización de sus PRC.

- ii. Apoyo al Gobierno Regional del Biobío en la actualización del plan regulador metropolitano de Concepción con EAE.
- iii. Participación en la mesa de organismos públicos encargados de la elaboración del plan estratégico de recursos hídrico (PERH) de la cuenca del río Biobío, junto con Agricultura, Gore, Ciencia Tecnología e Innovación, Planeamiento MOP, Obras Hidráulicas, DGA.
- iv. Elaboración de las bases de licitación del proyecto “Levantamiento de Insumos para la Formulación de un Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial del Sistema de Humedales Costeros de Coronel”, en el marco del programa de recuperación ambiental y social de Coronel.
- v. Participación en las reuniones de la mesa estratégica de recursos hídricos de la cuenca del río Biobío.
- vi. Participación en la conformación del comité técnico asesor para la aplicación, a nivel piloto, de la Guía Metodológica para la Planificación Ecológica Terrestre en la región del Biobío.

RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD

Es el área encargada de asesorar a las autoridades en materias relacionadas con la conservación de la biodiversidad. Asimismo, generar lineamientos y acciones orientados a la protección, conservación, uso sustentable y manejo sostenible de los recursos naturales, tanto en el territorio como en aguas continentales y marinas. Además, brinda asesoría para contribuir a la formulación e implementación de políticas públicas y de programas sectoriales que inciden en la conservación y gestión de los recursos naturales.

Uno de los principales logros del período fue el reconocimiento oficial de cuatro nuevos humedales urbanos en las comunas de Penco y Talcahuano:

1. **Humedal Urbano Denavi Sur**, comuna de Talcahuano, con una superficie de 1,66 hectáreas, publicado en el Diario Oficial el 11 de agosto de 2025.
2. **Humedal Urbano Playa Negra I**, comuna de Penco, con una superficie de 19,01 hectáreas, publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de 2026.
3. **Humedal Urbano Playa Negra II**, comuna de Penco, con una superficie de 0,28 hectáreas, publicado en el Diario Oficial el 12 de enero de 2026.
4. **Humedal Urbano Rocuant–Andalién Talcahuano**, comuna de Talcahuano, con una superficie de 1.377,20 hectáreas, publicado en el Diario Oficial el 10 de marzo de 2026.

En conjunto, estos cuatro humedales urbanos permitieron incorporar 1.398,15 hectáreas adicionales a la superficie regional protegida bajo la Ley N.º 21.202 de Humedales Urbanos. Con ello, la Región del Biobío alcanzó un total de 25 reconocidos oficialmente, que comprenden aproximadamente 2.401,7 hectáreas.

Este avance representa un resultado significativo para la protección de ecosistemas de alto valor ambiental emplazados dentro o en las proximidades de los límites urbanos. El reconocimiento de estos humedales permite fortalecer su consideración en los procesos de planificación territorial, evaluación ambiental y gestión municipal, además de promover acciones destinadas a su conservación, recuperación y uso sustentable.

Fortalecimiento de la gobernanza regional de humedales.

Durante 2026, la SEREMI impulsó la reactivación y el fortalecimiento del Comité Regional de Humedales, con el propósito de reinstalar una instancia permanente de coordinación entre instituciones públicas, municipios, academia, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados con la protección de estos ecosistemas.

El trabajo desarrollado permitió retomar la coordinación regional en materias relacionadas con la aplicación de la Ley de Humedales Urbanos, el seguimiento de los procesos de reconocimiento, la identificación de necesidades de gestión y la definición de prioridades para avanzar desde la declaración oficial hacia la conservación efectiva de los humedales.

Asimismo, se promovieron coordinaciones iniciales con los municipios para avanzar en la conformación y fortalecimiento de comités comunales de humedales y en el desarrollo de modelos de gobernanza local que permitan incorporar a las comunidades y organizaciones territoriales en la gestión de estos ecosistemas.

Implementación de acciones de los Planes RECOGE

Durante 2025 – 2026 - 2027, la SEREMI se encuentra desarrollando técnicamente la licitación denominada “Implementación de acciones de los Planes RECOGE Queule y Fardela Blanca”, correspondiente al proceso ID 613419-2-LE25. Esta contratación por 25,5 millones de pesos da continuidad a acciones prioritarias para la recuperación, conservación y gestión de ambas especies amenazadas y de sus hábitats.

En el marco de esta iniciativa se desarrollaron acciones de coordinación entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, incluyendo talleres de trabajo con instituciones públicas, propietarios y actores locales; actividades de terreno; levantamiento y actualización de información; y elaboración de productos comunicacionales y audiovisuales destinados a fortalecer el conocimiento y la valoración de estas especies en las comunas de Pelluhue, Chanco, Quirihue, Coelemu, Cobquecura, Tomé, Penco, Los Álamos, Hualqui, Hualpén Florida, Concepción y Talcahuano alcanzando un total a la fecha de más de 200 personas sensibilizadas y que además visitaron en terreno ecosistemas donde se encuentra presente esta especie.

Respecto del **Plan RECOGE del Queule**, el trabajo se orienta a fortalecer la coordinación entre las instituciones y territorios donde se distribuye la especie, promoviendo la participación de propietarios y comunidades vinculadas con los sectores en que existen poblaciones de queule.

En relación con el **Plan RECOGE de la Fárdela Blanca**, se desarrollaron acciones de sensibilización y comunicación sobre la importancia de proteger sus áreas de nidificación y reducir las amenazas que afectan a la especie. Entre estas actividades destacó la realización de la Copa Fárdela 2025 en Isla Mocha, comuna de Lebu, iniciativa que permitió acercar la conservación de la fárdela blanca a la comunidad mediante una actividad participativa y de educación ambiental.

Implementación regional del SBAP

Durante el período 2025–2026, la Seremi del Medio Ambiente de la Región del Biobío apoyó el proceso de instalación y entrada en operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que inició sus funciones el 1 de febrero de 2026. Este trabajo comprendió la coordinación interinstitucional, la participación en instancias regionales de gestión del cambio y el ordenamiento, sistematización y traspaso de expedientes, cartografías, antecedentes técnico-administrativos y compromisos asociados a áreas protegidas e instrumentos de conservación que pasan a formar parte de las funciones del nuevo servicio. Este trabajo comprendió antecedentes vinculados con

Santuarios de la Naturaleza, la propuesta de Área Marina Protegida Península de Hualpén–Cañón Submarino del río Biobío, el Paisaje de Conservación Territorio Nonguén y los Planes RECOGE, procurando asegurar la continuidad de las acciones y procesos regionales de conservación.

Hitos de Instalación

2024

- 9 de marzo: Publicación del DFL N°1 que define la entrada en operaciones.
- 1 de abril: Asume la primera Directora Nacional del SBAP.
- 26 de noviembre: Publicación del DFL N°2 que define la entrada en funcionamiento.

2025

- 14 de abril: Inauguración de la Oficina Nacional del SBAP por el Presidente de la República.
- 3 de julio: Firma del Convenio de Colaboración SBAP–SERNAPESCA.
- 16 de julio: Asume el primer Director Regional (Magallanes y Antártica Chilena).
- 6 de octubre: Asume como Director Nacional Aarón Cavieres.
- 13 de octubre: Realización de la primera Cuenta Pública.

2026

- 1 de febrero: El SBAP inicia operaciones.
- Traspaso del Programa 04 de CONAF al SBAP programado para marzo de 2027.

PRAS CORONEL

En materia del **PRAS de Coronel**, durante este periodo se han desarrollado importantes avances que reflejan el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre el Estado, la comunidad y el sector productivo.

Uno de los principales hitos ha sido el ingreso de la Municipalidad de Coronel al CRAS. Después de prácticamente una década de ejecución del Programa sin su participación, hoy se ha logrado retomar un trabajo conjunto y coordinado, fortaleciendo la colaboración entre las distintas instituciones y actores del territorio.

Asimismo, se llevó adelante el proceso de renovación del CRAS de Coronel. Por primera vez desde su puesta en marcha, se renovaron los cupos correspondientes a Consejeras y Consejeros Sociales, registrándose una amplia participación, con más de 174 organizaciones postulantes para 15 cupos. Este proceso permitió fortalecer y consolidar la gobernanza tripartita, integrada por representantes de la sociedad civil, el sector industrial y el Estado.

También se ha dado continuidad al Programa Reciclaje de la Bahía, desarrollado en Caleta Lo Rojas, iniciativa que contribuye a la protección del ecosistema marino y que ha permitido evitar que aproximadamente 20 toneladas de residuos lleguen al mar.

En paralelo, se desarrollaron estudios vinculados a la Norma Secundaria de Calidad Ambiental para las aguas y sedimentos del Golfo de Arauco, proceso que finalizó en marzo de 2026. A ello se suma el levantamiento de insumos para la formulación de un Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial del sistema de humedales costeros de Coronel, cuyo proceso finalizó a mediados de 2026.

Otro avance relevante corresponde a la Norma de Olores para el Sector Pesquero, que fue promulgada y publicada, constituyendo un proceso que tuvo su origen en Coronel y que se desarrolló con la participación de la comunidad y de los sectores regulados.

Finalmente, se avanzó en la implementación de un programa de Educación Ambiental dirigido a Consejeras y Consejeros representantes de organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer sus conocimientos, capacidades y herramientas para participar activamente en los procesos de gestión ambiental del territorio.

CALIDAD DEL AIRE

Esta área de la Seremi tiene por objetivo desarrollar políticas públicas que reduzcan las emisiones de agentes contaminantes del aire manteniendo los niveles de exposición de la población en niveles que salvaguarden la salud de la población. Estas políticas deben promover el desarrollo sustentable reduciendo los contaminantes que provocan el cambio climático y generando propuestas de adaptación.

En cuanto a los Planes de Descontaminación, en la actualidad el Plan de Prevención y descontaminación Atmosférica del Concepcion Metropolitano (PPDA CM) se encuentra en revisión y actualización de sus medidas.

Se realizaron los siguientes estudios y talleres relacionados con este plan:

- 1.- Estudio Areas Verdes PDA de Los Ángeles y Concepción Metropolitano.
- 2.- Estudio de generación Antecedentes para PDA Curanilahue, PPDA Concepcion Metropolitano y PDA Los Ángeles.
- 3.- Talleres de difusión Planes de Descontaminación atmosférica de la región del Biobío.

En el marco de la **Gestión de Episodios Críticos (GEC)**, se realizan actividades de difusión y educación ambiental dirigidas a la comunidad, utilizando nuestra unidad demostrativa de calidad del aire.

Estas actividades incluyen demostraciones del sistema de medición de calidad del aire, con el objetivo de acercar a la comunidad al conocimiento de los procesos de monitoreo y su importancia para la protección de la salud y el medio ambiente.

Asimismo, se realizan jornadas de difusión de los Planes de Descontaminación Atmosférica en las comunas del Concepción Metropolitano, dirigidas a juntas de vecinos (JJ.VV.), Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), concejos municipales de las 10 comunas que integran el Concepción Metropolitano y la comuna de Los Ángeles, entre otras instancias de información y sensibilización.

Se alcanzó un 78% de avance en la **meta de arborización** establecida en el marco del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica del Concepción Metropolitano (PPDA), contribuyendo al mejoramiento de las condiciones ambientales y a la recuperación de espacios verdes en la zona.

Además, se realiza un proceso de acompañamiento a la fiscalización de CONAF a los productores y vendedores de leña en la comuna de Hualqui.

Realización del Seminario de Calidad del Aire e Instrumentos de Gestión Ambiental, orientado a fortalecer el conocimiento y la comprensión de la comunidad y actores relevantes sobre la calidad del aire, su monitoreo y los principales instrumentos de gestión ambiental implementados en la región.

Desde el año 2025 se está trabajando en el proceso de elaboración del Plan de descontaminación Atmosférica de Curanilahue (PPDA) con el Comité Técnico, trabajo con JJVV para el levantamiento de necesidades y para comunicar el trabajo a realizar en Curanilahue.

En relación al **Programa de Recambio de Calefactores**, es ejecutado en el marco de los PPDA de la Región del Biobío: Concepción Metropolitano y Los Ángeles

Durante 2025 se realizó el llamado para el recambio de calefactores en las comunas comprendidas en los PPDA de Concepción Metropolitano y Los Ángeles. Las postulaciones se iniciaron en agosto, con una cuota inicial de 415 calefactores para la región: 166 equipos a pellet y 249 equipos de aire acondicionado, correspondientes a la compra realizada en 2024. Estos equipos ya se encuentran instalados.

Asimismo, se realizó una Gran Compra de 654 calefactores a pellet para la Región del Biobío, cuya instalación está programada para 2026, en el marco del mismo llamado 2025.

Adicionalmente, se ejecutaron cuatro procesos presenciales de validación de antecedentes correspondientes al llamado 2025, en los que se revisaron y validaron los antecedentes de 704 personas en Concepción Metropolitano y 400 personas en Los Ángeles.

El financiamiento de adquisición de equipos, servicio de instalación y servicio de consultoría, corresponde a financiamiento sectorial.

IV. Programación Regional Período 2026-2027

En materia **de SCAM y Estado Verde** en cuanto a la programación 2026 – 2027:

- El año 2027 se dará continuidad a las actividades desarrolladas este año y se implementará la nueva modalidad del SCAMs a través del programa piloto que incorpora inicialmente a cinco Municipios de la Región.
- En el Programa Oficina Verde, se dará continuidad a la certificación del Teatro Regional Biobío y se implementará la certificación de Asmar y Otro Ejecutivo manteniendo la Coordinación con el Nivel Central para estas actividades.
- Se espera mantener las coordinaciones internas con los programas de la Seremi y con instituciones ligadas a la temática ambiental en la Región.

En relación a los **FPA y SCAE** en cuanto a la programación 2026 – 2027:

- Para el año 2026, se ejecutarán 10 proyectos FPA, ya se encuentran firmados los respectivos convenios

- Fomentar una mayor participación de Comunidades y Asociaciones Indígenas para las postulaciones al Concurso FPA 2027.
- Continuar promoviendo el FPA como una un instrumento clave para el fortalecimiento de la educación ambiental y participación ciudadana, promoviendo iniciativas locales con impacto directo en los territorios.
- Para el año 2026, se proyecta continuar fortaleciendo la implementación del SNCAE con foco en:
 - Fomentar la articulación y alianzas entre establecimientos educacionales y otras instituciones.
 - Potenciar el trabajo de jardines infantiles, mediante asesoría de contrapartes JUNJI y Fundación Integra.
 - Continuar siendo una herramienta clave para el fortalecimiento de una ciudadanía ambiental activa, crítica y comprometida con el cuidado del entorno, en coherencia con los desafíos locales y globales

En cuanto a los **Consejo Consultivo**, las **Consultas Ciudadanas** y el **Comité Regional de Escazú**.

- Continuar con el calendario de reuniones mensuales ordinarias y extraordinarias del Consejo Consultivo. Considerando sesiones itinerantes para conocer de cerca las distintas realidades de los sectores que se encuentran representados en esta instancia participativa, abordando en cada una de las sesiones diversos temas de interés local, regional y nacional.
- Conocer la planificación anual de los procesos de Consultas Ciudadanas nacionales para planificar con tiempo las acciones a realizar. De momento seguir avanzando en los procesos que se encuentra en desarrollo a través de desarrollo de diversa instancia de participación.
- Seguir desarrollando el calendario de reuniones mensuales ordinarias y trabajo de comisiones del Comité Regional de Escazu, potenciando temas de interés de los sectores que lo integran con una comunicación cercana, transparente y respetuosa.
- Seguir potenciando el financiamiento del proyecto presentado en la sesión de la comuna de Tucapel.

En materia de **Cambio Climático** se contempla:

- Durante el año 2025, el área de Cambio Climático concentró sus gestiones en materializar las primeras acciones operativas del PARCC, fortalecer el trabajo técnico con los municipios de la región y difundir los instrumentos de gestión climática a la comunidad
- Publicación Oficial e Inicio de Implementación del PARCC: Gestión de la publicación en el Diario Oficial por parte de la Delegación Presidencial Regional (DPR) e inicio del seguimiento semestral de metas junto a la DIPLADE del GORE.
- **Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) e Infraestructura Verde:**
 - Capacitaciones en SbN aplicadas al abastecimiento hídrico urbano y rural.
 - Desarrollo de planes y proyectos de protección de áreas clave para la provisión y almacenamiento de agua a escala provincial. "Humedal Puerto Norte - Isla Santa María"
 - Asistencia técnica a las municipalidades que aún no cuentan con su PACCC aprobado, resguardando la coherencia con el PARCC y la Ley Marco.
 - Protección de Humedales: Talleres sobre delimitación de humedales urbanos y fiscalización ambiental dirigidos a equipos técnicos municipales
 - Gestiones realizadas y resultados obtenidos durante el año 2025.

En la oficina de **Economía Circular** se contempla:

- Capacitación a municipios y comercio minorista en materias asociadas a la Ley de Plásticos de un Solo Uso.
- Difusión de los reglamentos asociados a las metas de la Ley REP y continuidad del trabajo de coordinación con los actores regionales.
- Realización de la Segunda Cumbre de Economía Circular durante septiembre y participación activa en la Campaña Teletón.
- Apoyo técnico a la Municipalidad de Curanilahue para la solicitud de recursos destinados a la construcción de una Planta de Compostaje.
- Inicio de los Planes de Residuos Locales (PRELOS) en las comunas de Cañete y Chiguayante.
- Formalización y capacitación de nuevos recicladores de base nivel básico y avanzado, además de apoyo para la obtención de recursos destinados a nuevos lugares de trabajo. En el marco del programa Quiero Mi Barrio (QMB), se está desarrollando un trabajo de coordinación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) orientado a incorporar y fortalecer las metas asociadas a la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos (ENRO), promoviendo la consideración de acciones de prevención, separación y valorización de residuos orgánicos en los territorios intervenidos por el programa para el cumplimiento de metas.
- Avances, desde la Secretaría Ejecutiva de Residuos y Economía Circular (MMA, MINSAL, GORE, SUBDERE, Asociaciones de Municipios) en la propuesta de posibles soluciones que permitan mejorar la gestión de los residuos sólidos domiciliarios en la región.

En materia de **Cambio Climático** existen brecha Presupuestaria Municipal y Regional: Escasez de presupuesto para implementar las medidas del PARCC y PACCC, requiriendo apalancar fondos sectoriales, FNDR e internacionales.

- Cumplimiento de Plazos Normativos: Apoyar a los equipos municipales (que suelen presentar limitaciones de personal especializado) para finalizar y aprobar sus PACCC dentro de los plazos establecidos por la Ley Marco.
- Institucionalización del Cambio Climático: Articular con las nuevas autoridades regionales y municipales la prioridad de contar con unidades técnicas o encargados/as de cambio climático permanentes.

Principales desafíos en materia de **Evaluación Ambiental Estratégica**:

- a) Promover el reconocimiento de los humedales urbanos declarados en la región, en los PRC de las respectivas comunas.
- b) Someter los productos finales de la planificación ecológica a consideración del comité técnico ampliado de la región del Biobío.
- c) Apoyar la conformación de la mesa estratégica de recursos hídricos de las cuencas costeras de la provincia de Arauco.
- d) Participar de la mesa estratégica de recursos hídricos de la cuenca del río Biobío y del avance en la formulación del PERH para dicha cuenca.
- e) Difundir el resumen ejecutivo de la propuesta de plan de ordenamiento y gestión territorial del sistema de humedales costeros de Coronel, promoviendo su aprobación o reconocimiento formal.

- f) Seguir apoyando a los municipios de Coronel, Talcahuano y otros, en la actualización de sus PRC con EAE.

Principales desafíos en materia de **Recursos Naturales y Biodiversidad** para el trabajo regional se orientarán a las siguientes líneas prioritarias:

- Continuidad de la gestión de humedales urbanos: efectuar el seguimiento de los humedales reconocidos, apoyar técnicamente a los municipios y continuar la tramitación de nuevos procesos que cuenten con antecedentes suficientes para su evaluación.
- Fortalecimiento del Comité Regional de Humedales: consolidar su funcionamiento periódico, establecer una agenda regional de trabajo y realizar seguimiento a los acuerdos y compromisos adoptados por sus integrantes.
- Conformación y fortalecimiento de comités comunales: apoyar a las municipalidades interesadas en desarrollar instancias comunales de gobernanza, incorporando la participación de comunidades, organizaciones ambientales, establecimientos educacionales, academia, propietarios y servicios públicos.
- Desarrollo de modelos de gobernanza: promover mecanismos de coordinación que permitan abordar de manera conjunta la conservación, recuperación, monitoreo, educación ambiental y gestión de amenazas que afectan a los humedales urbanos.
- Educación y comunicación ambiental: continuar generando actividades y productos comunicacionales que permitan difundir la importancia de los humedales urbanos, el queule, la fardela blanca y otros componentes relevantes de la biodiversidad regional.
- Coordinación con el SBAP: mantener mecanismos de articulación institucional que permitan dar continuidad a los procesos territoriales, evitar duplicidades y asegurar una adecuada coordinación entre las funciones de la SEREMI y las competencias del nuevo servicio.

En cuanto a los desafíos y proyecciones de **Calidad del Aire** para el año 2026

- Continuar con el proceso de elaboración de los anteproyectos de los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDAs) definitivos, mediante el trabajo técnico de los Comités Operativos Ampliados, junto con la difusión de sus medidas y procesos a la comunidad.
- Desarrollar los Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) y los procesos de Consulta Pública asociados a los anteproyectos.
- Fortalecer el trabajo del Comité Operativo Ampliado, integrado por servicios públicos y organizaciones de la sociedad civil, en el proceso de elaboración de los anteproyectos de los PDA.
- Continuar con la actualización de los sistemas de medición y monitoreo de la calidad del aire, promoviendo su conocimiento y comprensión por parte de la comunidad y relevando la importancia de contar con información oportuna y confiable.
- Durante 2026 se continuará con la ejecución del “Programa de Recambio de Calefactores 2025 para la comuna de Los Ángeles” y del “Programa de Recambio de Calefactores 2025 para las diez comunas del Concepción Metropolitano”.
- Durante los primeros meses de 2026, se instalaron y chatarrizaron 415 calefactores correspondientes al proceso de compra 2024 en la región: 166 equipos a pellet y 249 equipos de aire acondicionado.
- Asimismo, se realizaron dos procesos de validación correspondientes al llamado 2025, destinados a la asignación de beneficiarios para el recambio de 654 calefactores a pellet.

- Mantener el financiamiento sectorial para la adquisición, instalación y seguimiento de los calefactores, fortaleciendo el impacto de estas medidas en la reducción de emisiones y el mejoramiento de la calidad del aire.

Cuenta Pública 2026
— Participativa —

